



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

**Inconsistencia de la reserva de la indagación previa en el
proceso penal ecuatoriano, frente a las normas del debido
proceso**

Tesis previa la obtención del Título de:

ABOGADO

Autor: Sánchez Vacas Christian Hernán

E-mail: christ-san11@hotmail.com

Tutor: Dr. Ochoa Córdova Otto Mario

**Mayo - 2014
Quito**

DEDICATORIA

El presente trabajo investigativo se lo dedico a quienes son la razón de mi vida, mi familia:

A mi amada esposa, quién con sus sabios conocimientos me ha sabido ilustrar y guiar en la elaboración de este presente trabajo.

A mis tres angelitos, quienes han sido el mejor regalo que Dios y la vida me han podido dar.

A mi Padre y Madre, quienes han sido el apoyo incondicional de mi vida, quienes con sus sabios consejos y palabras me han guiado por el camino del bien. No los defraudare y ésta es la mejor demostración de ello.

A todos ustedes que han sido la columna vertebral de mi existencia. Por todo este esfuerzo que ha llegado a su culminación. Tantas noches sin dormir, han valido la pena. Gracias por confiar en mí, aquí está el fruto de todos nuestros sacrificios juntos. Los amo con todo mi corazón, y saben que les dedico todos los triunfos de mi vida.

Gracias por todo, los llevo en mi corazón los amo.

AGRADECIMIENTO

El presente trabajo de tesis primeramente me gustaría agradecerle a ti Dios por bendecirme para llegar hasta donde he llegado, porque hiciste realidad este sueño anhelado.

Así como también mi agradecimiento infinito, al señor Dr. Mario Ochoa Córdova, inspiración y ejemplo para amar y engrandecer la profesión; brillante, elocuente y gentil catedrático, cuyo talante de excelencia y humildad, instaron para desde un inicio, deseara que dirija mi trabajo de tesis y que gracias a su bondad, hoy pueda enorgullecerme de ello.

A la Universidad Central del Ecuador, lugar donde me formé como persona y profesional, cuyo recuerdo siempre estará unido con la nostalgia y el compromiso de engrandecerla, al haber crecido en sus aulas, aprendido de sus maestros y convivido con quienes serán colegas, los que alguna vez fueron compañeros de experiencias, de sueños, de ideales, de una etapa de la vida que termina, pero que no dejará de vivir en el sentimiento.

En todos estos años en los que aparte de enriquecerme de conocimientos, tuve la bendición de Dios de conocer a personas que estarán en mi corazón para siempre, quienes por infinitas razones han puesto un ladrillo para poder culminar este trabajo.

Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional a las que me encantaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en los momentos más difíciles de mi vida. Algunas están aquí conmigo y otras en mis recuerdos y en mi corazón, sin importar en donde estén quiero darles las gracias por formar parte de mí, por todo lo que me han brindado y por todas sus bendiciones.

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD

Quito, 27 de febrero del 2014

Yo, **SÁNCHEZ VACAS CHRISTIAN HERNÁN**, autor de la investigación, con cédula de ciudadanía N° 1002173043, libre y voluntariamente DECLARO, que el trabajo de Grado titulado: **“INCONSISTENCIA DE LA RESERVA DE LA INDAGACIÓN PREVIA EN EL PROCESO PENAL ECUATORIANO, FRENTE A LAS NORMAS DEL DEBIDO PROCESO”**. Es de mi plena autoría, original y no constituye plagio o copia alguna, constituyéndose en documento único, como mandan los principios de investigación científica, de ser comprobado lo contrario me someto a las disposiciones legales pertinentes.

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sánchez Vacas Christian Hernán', with a large, sweeping flourish extending to the right.

SÁNCHEZ VACAS CHRISTIAN HERNÁN

C.C. 1002173043

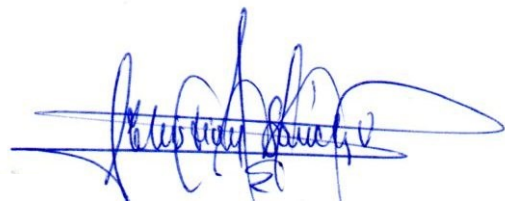
CORREO: christ-san11@hotmail.com

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, **SÁNCHEZ VACAS CHRISTIAN HERNÁN**, en calidad de autor de la tesis realizada sobre: **“INCONSISTENCIA DE LA RESERVA DE LA INDAGACIÓN PREVIA EN EL PROCESO PENAL ECUATORIANO, FRENTE A LAS NORMAS DEL DEBIDO PROCESO”**; por la presente autorizo a la **UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los arts. 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito, 27 de febrero de 2014



FIRMA.....

C.C. 1002173043

APROBACIÓN DEL TUTOR

Quito, 22 de marzo 2013

Señor Doctor
WALTER MARTINEZ VELA
DECANO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA DE LA U. CENTRAL
En su despacho.

Señor Decano;

Cúpleme poner en su consideración la tesis elaborada bajo mi dirección por el señor CHRISTIAN HERNAN SANCHEZ, intitulada INCONSISTENCIA DE LA RESERVA DE LA INDACION PREVIA EN EL PROCESO PENAL ECUATORIANO, FRENTE A LAS NORMAS DEL DEBIDO PROCESO, la misma que ha sido ejecutada conforme el plan de tesis aprobado, previa la obtención al título de Abogado.

Procede por tanto la designación de un Tribunal Calificador que el señor Decano habrá de designar para el efecto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de estima y consideración.

Atentamente

Mario Ochoa Córdova

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA



RECIBIDO

26-03-2013

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA	2
AGRADECIMIENTO.....	3
DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD	4
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL	5
APROBACIÓN DEL TUTOR	6
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	7
ÍNDICE DE CUADROS	11
ÍNDICE DE GRÁFICOS	12
RESUMEN EJECUTIVO	13
ABSTRACT.....	xiv
INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I	4
1. LA INVESTIGACIÓN PRE-PROCESAL	4
1.1. SISTEMA INQUISITORIO.....	4
1.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA INQUISITORIO	6
1.3. LA INVESTIGACIÓN PRE-PROCESAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO.....	9
1.3.1. SISTEMA ACUSATORIO	9
1.4. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INVESTIGACIÓN PRE-PROCESAL EN MATERIA PENAL.....	12
CAPITULO II.....	15

2.	LA INDAGACIÓN PREVIA.....	15
2.1.	PRINCIPIOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES QUE RIGEN EN LA INVESTIGACIÓN PRE-PROCESAL EN EL ÁREA PENAL.....	22
2.2.	DERECHO A SER INFORMADO Y EL ACCESO A LOS ELEMENTOS DE CARGO Y DESCARGO EN LA INDAGACIÓN PREVIA.	25
2.3.	LA PARTICIPACIÓN ACTIVA O PASIVA DEL OFENDIDO Y SOSPECHOSO DENTRO DE LA INDAGACIÓN PREVIA.	27
CAPITULO III		29
3.	EL DEBIDO PROCESO	29
3.1.	EL DEBIDO PROCESO EN EL ECUADOR	30
3.1.1.	FUNCIÓN CONSTITUCIONAL DE NUESTRO ESTADO SOCIAL DE DERECHO.....	31
3.2.	SUJETOS PROCESALES RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN MATERIA PENAL	32
3.2.1.	LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	32
3.2.2.	OFENDIDO	35
3.2.3.	DERECHOS DEL OFENDIDO.....	37
3.2.4.	PROCESADO O ACUSADO.....	40
3.2.4.1.	PROCESADO	40
3.2.5.	DEFENSOR PÚBLICO	43
3.2.6.	JUEZ O JUEZA DE GARANTÍAS PENALES.....	44
3.2.7.	TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES.....	48
3.3.	EL DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL	49
3.4.	EL DERECHO A LA DEFENSA COMO UN PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO.....	51

3.4.1.	PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM.....	52
3.4.2.	PRINCIPIO DE CELERIDAD.....	54
3.4.3.	SER OÍDO ANTE UN JUEZ IMPARCIAL, INDEPENDIENTE Y COMPETENTE.	54
3.5.	LAS NORMAS DEL DEBIDO PROCESO SE VEN AFECTADAS O NO POR LA RESERVA DE LA INDAGACIÓN PREVIA.....	55
CAPITULO IV		60
4.	INVESTIGACIÓN DE CAMPO	60
4.1.	NIVEL O TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN	60
4.1.1.	TÉCNICAS. DE LA INVESTIGACIÓN.....	62
4.1.2.	INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.	63
4.1.3.	POBLACIÓN Y MUESTRA.	63
4.2.	RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	63
4.1.4.	DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	65
4.3.	APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.....	70
4.4.	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	70
4.5.	ELABORACIÓN DE GRÁFICOS Y CUADROS ESTADÍSTICOS.....	71
4.5.1.	ABOGADOS.....	71
4.5.2.	ESTUDIANTES PASANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PICHINCHA	81
4.5.3.	AGENTES FISCALES	91
4.6.	POBLACIÓN: MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES PENALES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.....	101
4.6.1.	MUESTRA No.1	101

4.7. POBLACIÓN: MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES PENALES DE PICHINCHA	103
4.7.1. MUESTRA No. 2	103
4.8. POBLACIÓN: MIEMBROS DEL TRIBUNAL 5to. DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA	105
4.8.1. MUESTRA No. 3	105
4.9. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS	107
4.10. CONSTATACIÓN DE HIPÓTESIS	108
4.11. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA	109
4.12. ESTUDIO DE CASOS (CASUÍSTICA)	110
CONCLUSIONES	112
RECOMENDACIONES	114
PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA	116
BIBLIOGRAFÍA	118

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1	71
Cuadro 2	73
Cuadro 3	75
Cuadro 4	77
Cuadro 5	79
Cuadro 6	81
Cuadro 7	83
Cuadro 8	85
Cuadro 9	87
Cuadro 10	89
Cuadro 11	91
Cuadro 12	93
Cuadro 13	95
Cuadro 14	97
Cuadro 15	99

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1.....	71
Gráfico 2.....	73
Gráfico 3.....	75
Gráfico 4.....	77
Gráfico 5.....	79
Gráfico 6.....	81
Gráfico 7.....	83
Gráfico 8.....	85
Gráfico 9.....	87
Gráfico 10.....	89
Gráfico 11.....	91
Gráfico 12.....	93
Gráfico 13.....	95
Gráfico 14.....	97
Gráfico 15.....	99

RESUMEN EJECUTIVO

Inconsistencia de la reserva de la indagación previa en el proceso penal ecuatoriano, frente a las normas del debido proceso

La investigación de este tema, se lo ha realizado en vista de la polémica que se ha generado entre abogados y fiscales, sobre la aplicación del actual Código de Procedimiento Penal (CPP) el cual ha sido mal entendido y mal aplicado frente a la reserva de la fase pre procesal penal de la Indagación Previa. En virtud de lo cual es necesario hacer un breve análisis con el único objetivo de generar consciencia de investigación y argumentación jurídico penal contra las cotidianas violaciones a las garantías del debido proceso de las que, ofendidos y sospechosos han sido víctimas desde y no por la vigencia del nuevo estatuto adjetivo penal. Por lo que es necesario manifestar de acuerdo a las normas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, que la indagación previa no debería de ser reservada para las partes que intervienen en el proceso penal, ya que se dejaría en indefensión a los sujetos intervinientes y se violaría las garantías del debido proceso, ya que es necesario exponer dentro de todo análisis que la indagación previa es una actividad eventual administrativa de la Fiscalía en donde lo único que se debe de obtener son elementos de convicción para poder iniciar un juicio contra un culpable.

PALABRAS CLAVES:

RESERVA,
INDAGACIÓN PREVIA,
DEBIDO PROCESO,
INDEFENSIÓN,
DEFENSA,
FISCALÍA.

ABSTRACT

Inconsistency reserve the preliminary investigation in the Ecuadorian criminal proceedings against the norms of due process

The current work has been made due to the polemic generated between lawyers and government attorneys on the application of the current code of penal procedure (CPP), which has been misunderstood and applied, regarding the penal pre-process stage of the prior investigation. Hence, a brief analysis becomes necessary in order to generate investigation awareness and penal legal argumentation against continuous violations to warranties to due process, insulted and suspicious parties that have been affected since and not due to effectiveness of the new penal statute. In accordance to regulations of the constitution of the republic of Ecuador, prior investigation shall not be restrained to the parties involved in the penal process, because such parties would be placed in a defenseless position and due process warranties would be violated it should be exposed that, in every analysis, prior investigation is an administrative eventual in charge of the government attorney's office, where only conviction elements should be in order to start a trial against the guilty party.

KEYWORDS: CONFIDENTIALITY, PRIOR INVESTIGATION, DUE PROCESS, DEFENSELESS, DEFENSE, GOVERNMENT ATTORNEY'S OFFICE.

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have prepared the attached translation from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and belief.


Ernesto Andino Garcia
Translator



INTRODUCCIÓN

La investigación de este tema, se lo ha realizado en vista de la polémica que se ha generado entre abogados y fiscales, sobre la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal (CPP) el cual ha sido mal entendida –y mal aplicada– frente a la reserva de la fase pre procesal penal de la Indagación Previa . En virtud de lo cual es necesario hacer un breve análisis con el único objetivo de generar consciencia de investigación y argumentación jurídico penal contra las cotidianas violaciones a las garantías del debido proceso de las que, ofendidos y sospechosos han sido víctimas desde y no por la vigencia del nuevo estatuto adjetivo penal. Por lo que es necesario manifestar de acuerdo a las normas establecidas en la Constitución Política de la República del Ecuador que la indagación previa no debería de ser reservada para las partes que intervienen en el proceso penal, ya que se dejaría en indefensión a los sujetos intervinientes y se violaría las garantías del debido proceso, ya que es necesario exponer dentro de todo análisis que la indagación previa es una actividad eventual administrativa de la Fiscalía en donde lo único que se debe de obtener son elementos de convicción para poder iniciar un juicio contra un culpable.

De lo expuesto anteriormente queda muy claro que es aquí en donde el Fiscal con la colaboración de la policía judicial procede a abrir la investigación y la misma comprende a la Indagación Previa, es decir que aquí dicho funcionario ha tenido ya conocimiento de una noticia criminal, la cual al considerarse la acción pública el fiscal debe tomar conocimiento y recopilar todos los elementos que le puedan ayudar al esclarecimiento del delito ya sea de los autores cómplices o encubridores del mismo. *“se debe dejar muy en claro sobre las atribuciones que la ley de procedimiento penal le asigna a los fiscales sin antes recordar que la Constitución del Ecuador en el inciso primero del art. 167 en forma precisa*

establece que los únicos órganos investidos de potestad judicial son los de la función judicial y para evitar cualquier confusión o llamado engaño, la propia Constitución del Ecuador, en el art. 178 se encarga de establecer cuáles son los mencionados órganos entre los cuáles no incluye al Ministerio Público.”

Se debe tener muy en cuenta que la Indagación Previa es una actividad pre-procesal, que se debe iniciar necesariamente, antes de resolver la apertura de la instrucción, exceptuándose en los casos de delito flagrante. De lo expuesto anteriormente queda claro que el rol del Ministerio Público es “investigativo” tendiente a descubrir el cometimiento de una infracción y sus responsables, dentro de sus fases pre-procesal como procesal. *“La Indagación Previa es una actividad temporal la misma que puede extenderse hasta por un año en los delitos sancionados con pena de prisión o dos años en los delitos sancionados con pena de reclusión de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del ” (Código de Procedimiento Penal, pág. 34)*

La reserva de la indagación que se debe mantener durante el desarrollo de la misma se refiere al público en general y a la prensa, es decir se establece en forma clara que el secreto o reserva de las investigaciones no comprende a las personas, que son parte del proceso investigativo, como el ofendido y el sospechoso; tienen derecho a conocer las actuaciones relacionadas con la mencionada indagación, sin que los Fiscales puedan impedirles el acceso directo al expediente. Bajo esta premisa es importante destacar que el imputado y denunciante tienen derecho a ser notificados con el inicio de la Indagación Previa desde el momento en que el Fiscal resuelva investigar la noticia criminis, por cualquier medio que la obtenga y es obligación de él dar cumplimiento a lo señalado en el *“artículo 27 de la (Ley Orgánica del Ministerio Público, R.O No. 26, 1997), que dispone que: El Ministerio Público garantizará la intervención de la defensa de los imputados o procesados, en las indagaciones previas y las investigaciones procesales por delitos de acción pública, quienes deberán ser citados y notificados para los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de descargo, cualquier actuación que viole esta disposición carecerá de eficacia probatoria.”*

Situación ésta última, que ha generado un evidente problema jurídico en la actitud o postura de los agentes fiscales que reiterativamente se niegan a dar cumplimiento con este mandato de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en armonía con lo preceptuado en el *“Art. 70, inciso segundo del (Código de Procedimiento Penal, pág. 14), aplicando a tabla rasa el Art. 215 del Código Procesal Penal,”* respecto a no notificar a las partes involucradas en la investigación,

mucho peor a que actúen en las diligencias de investigación ejerciendo sus derechos en la consecución de los elementos que más tarde servirán como pruebas de cargo o descargo, contrariando la norma prevista en la Constitución “ y la Ley Orgánica del Ministerio Público, normas que por la Supremacía se encuentra muy superior a la Ley Ordinaria que es el Código Procesal Penal. Por lo expuesto la disposición legal antes invocada tiene el carácter de vinculante y de inobservarse, se violaría el debido proceso y la indagación previa que es el antecedente de la instrucción fiscal y sería nula. La etapa referida a la indagación previa se fundamenta en la necesidad de una investigación preliminar dirigida a determinar la procedencia o no de la acción penal, la que tiene carácter de reservada, siendo sus resultados conocidos durante la etapa de instrucción. Así mismo están contenidas dentro de un proceso de partes; A través de la investigación se descubre el hecho y se identifica al autor; El acopio probatorio permite la demostración de la acusación; Las actividades del acusador están dirigidas a obtener la sanción para el acusado; La defensa se manifiesta contradiciendo los fundamentos de la acusación y prevaleciendo el interés en la absolución del acusado; De la controversia que desarrollan las partes surge la decisión a cargo del juzgador, dentro de este esquema se desarrollan las generalidades de la indagación previa y las etapas del proceso penal acusatorio.”

CAPITULO I

1. LA INVESTIGACIÓN PRE-PROCESAL.

1.1. SISTEMA INQUISITORIO

El tipo inquisitorio nace desde el momento en que aparecen las primeras pesquisas de oficio y esto ocurre cuando desaparece la venganza y cuando el Estado, velando por su conservación, comprende la necesidad de reprimir poco a poco ciertos delitos y así es como nació en Roma y en las monarquías cristianas del siglo XII, lo cual origina el desuso del sistema acusatorio que se practicó hasta el siglo XIII. *“Bajo la influencia de la inquisición recibió el proceso penal hondas modificaciones que lo transformaron por completo. Es así que en algunos países como España, el sistema inquisitivo floreció gracias al compromiso de algunos reyes con la iglesia católica como sucedió con la instalación del tribunal de la Santa Inquisición. (www.google.com.derechoecuador.com)*

En este sistema el Juez, es el que por denuncia, por quejas, por rumores inicia el procedimiento de oficio, se dedica a buscar las pruebas, examina a los testigos, todo lo guarda en secreto. No hay acusado, la persona es detenida y colocada en un calabozo. *“Dura hasta la aparición de la Revolución Francesa, cuya influencia se extiende por toda Europa con el espíritu renovador de los libertarios que generó una conciencia crítica frente a todo lo que*

venía de la vieja sociedad feudal.” (Guerrero Vivanco, pág. 108) El nuevo modelo proponía en lugar de la escritura y el secreto de los procedimientos, de la negación de la defensa y de los jueces delegados del poder imperial, la publicidad y oralidad en los debates, la libertad de defensa y el juzgamiento de los jurados, lo cual generó la extinción de este sistema netamente inquisitorio.

En el sistema inquisitivo el ejercicio público de acción penal pesquisable de oficio se presentaba de la siguiente manera:

- La acción penal es de carácter público, en general se la ejerce de oficio, pudiendo administrarse la acusación particular;
- El ejercicio de la acción penal pesquisable de oficio tiene como antecedentes.-1) La pesquisa que de oficio se efectúe el juez o tribunal competente.-2) La exaltación fiscal.-3) La denuncia.-4) La acusación particular.-5) El parte policial informativo o la indagación policial; y 6) La orden superior de origen administrativo.
- Los procesos penales que por un delito pesquisable de oficio se inicie mediante auto cabeza de proceso, providencia con la que se da inicio al sumario seguido de las etapas; Intermedia, Plenario e Impugnación:
- Los jueces penales organizarán y complementarán el sumario y sustanciarán el proceso hasta la etapa intermedia;
- Es necesario la intervención del Ministerio Público en todos los procesos

penales pesquisable de oficio, no obstante dicha causa puede actuar el acusador particular; y,

- Los Tribunales Panales tienen competencia para sustanciar el plenario y para dictar sentencia en todos los procesos penales que conozcan, cualquiera que sea la pena prevista para el delito que se juzga;

Dentro de esta esfera se advierte;

- En el procedimiento anterior el juez investigaba, probaba y juzgaba, en tanto que la acción del Fiscal era estática-dictaminar;
- En el procedimiento actual el fiscal investiga y acusa, mientras que el juez únicamente juzga;

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA INQUISITORIO

En este sistema el juzgador es un técnico.

- Durante el curso del proceso, el acusado es segregado de la sociedad, mediante la institución denominada prisión preventiva.
- El juzgador es un funcionario designado por autoridad pública

- El juzgador representa al Estado y es superior a las partes.
- Aunque el ofendido se desistiera, el proceso debe continuar hasta su término.
- El juez tiene iniciativa propia y poderes discrecionales para investigar. La prueba, en cuanto a su ubicación, recepción y valoración, es facultad exclusiva del juez.
- Se otorga un valor a la confesión del reo, llamada la reina de las pruebas.
- El juez no llega a una condena si no ha obtenido una completa confesión, la cual más de una vez se cumplió utilizando los métodos de la tortura.
- Todos los actos serán secretos y escritos.
- El acusado no conoce el proceso hasta que la investigación no este afinada
- El juez no está sujeto a recusación de las partes. La decisión no se adopta sobre la base del convencimiento moral, sino de conformidad con el sistema de pruebas legales.

Por lo que uno de los principales legados dejados por los hispanos en el nuevo mundo tras centurias de ignominia y tutelaje peninsular fue precisamente el Sistema Procesal penal

inquisitorial que estuvo vigente en el Ecuador desde la Colonia hasta el 13 de julio del año 2001.

En este profano sistema, el titular del órgano jurisdiccional penal competente realizaba una pluralidad de funciones;

- 1- Ejercía la acción penal en los delitos de acción pública; Solamente el titular del órgano jurisdiccional penal competente podía iniciar el proceso penal mediante el auto cabeza de proceso.
- 2- Ejercía la función investigativa dentro del proceso penal.
- 3- Tenía la facultad de impulsar el proceso y por lo tanto la iniciativa probatoria sin perjuicio de petición de parte.
- 4- Decidía la causa juzgando la conducta ilícita que se imputa al procesado. Amplia labor jurídica unipersonal totalmente divorciada de la objetividad y de la *sindéresis*, puesto que resultaba absurdo que el juez tomara una decisión acerca de lo que él mismo había investigado, lo cual le impedía justificar las diligencias realizadas en la estación probatoria.

Dentro de este contexto, el Ministerio Público se encontraba subordinado al órgano jurisdiccional penal competente, totalmente privado de la iniciativa en la investigación pre procesal y procesal para el esclarecimiento del delito, prefigurando de esta manera una mera actuación simbólica que arreglaba el proceso y cuyo dictamen acusatorio o absolutorio era una pieza de escasa relevancia en todo el andamiaje procesal.

1.3. LA INVESTIGACIÓN PRE-PROCESAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO.

1.3.1. SISTEMA ACUSATORIO

La primitiva concepción del Juicio Criminal exigía un acusador, prevalecía el interés privado, el del ofendido; posteriormente evoluciona y esta persona era cualquiera del pueblo, procedimiento que a su vez evoluciona por introducir la publicidad y la oralidad.

La decadencia de este sistema radica básicamente en que para que funcione se requiere que se dé en un pueblo eminentemente educado en las virtudes ciudadanas y que en la realidad este sistema no consulta los intereses de la defensa social y el inadecuado ritmo de la vida contemporánea corrompida por la baja política y donde están ausentes las virtudes cívicas.

“El proceso acusatorio se caracteriza esencialmente por ser contradictorio, público y oral, en los que las funciones de acusar, defensa y decisión, están encomendadas a un órgano propio independiente, de ahí que la forma acusatoria da lugar fundamentalmente a un proceso de partes, y la forma inquisitoria a la concentración de un mismo órgano con funciones de promoción de la acción penal y decisión.

Al respecto, es básico analizar tres aspectos fundamentales:

a. La investigación previa debe desarrollarse dentro de un límite de tiempo determinado, por lo que las diligencias probatorias deben ser realizadas prontamente, debiendo el fiscal actuar con diligenciamiento.

b. La resolución de apertura de la etapa de instrucción es autónoma, pues únicamente corresponde al fiscal; y,

c. Se establece el principio de suspensión de la investigación previa, cuando el fiscal considere que de lo actuado no aparecen suficientes elementos para iniciar la instrucción fiscal.” (www.google.com.sistemaacusatorio)

La investigación termina con un cierre, momento a partir del cual consideramos que se inicia la fase o etapa intermedia del nuevo proceso penal. La decisión de declarar o no concluida la investigación, es en principio, una facultad propia del Ministerio Público, congruente con la definición constitucional de que le corresponde dirigir de manera exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado.

Durante esta fase de investigación pueden suscitarse graves conflictos cuando cualquiera de los intervinientes, pero especialmente el imputado, consideren que ésta no se encuentra agotada, puesto que no se han practicado diligencias solicitadas por ellos mismos, en nuestro nuevo procedimiento se contempla el derecho de los intervinientes para acudir al juez de garantías, realizando peticiones que pueden llevar a que sea este último el que en definitiva decida en qué momento realmente concluye esta primera fase del procedimiento.

Una vez que el Ministerio Público practique, regido entre otros, por los principios de legalidad y objetividad, todas las diligencias que hubiere considerado necesarias para la averiguación del hecho punible y para descubrir a sus autores, cómplices y encubridores, debe proceder a declarar el cierre de la investigación.

En definitiva el sistema acusatorio es la regulación de la investigación procedimental que encomienda al fiscal la investigación de la verdad material, como una obligación funcional de recoger el material probatorio demostrativo de la acusación, encomendando al acusador la recolección de las pruebas de culpabilidad, o de su inculpabilidad para demostrar que la acusación es infundada, dentro de un litigio de alegato y réplica con argumentos a favor y en contra sobre la base de aportación de pruebas de cada parte, otorgando al ofendido, la capacidad de justificar esa condición interviniendo en el proceso así como confiriendo la iniciativa de la acción penal en los delitos de instancia particular y de acción privada.

“El Código de Procedimiento Penal del año 2000 trae como novedad el nuevo papel que cumple el Ministerio Público en el Proceso Penal Acusatorio que será el órgano encargado de ejercer el derecho de perseguir al delincuente a través de las facultades que le confiere la Constitución Política, la nueva Ley Adjetiva Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público en la investigación del delito tanto en el ámbito pre procesal como procesal (obligación jurídica de probar la existencia del delito y la autoría o participación de determinadas personas en su comisión),” (Zavala Baquerizo, 2006, pág. 56) la titularidad del ejercicio de la acción penal pública y la potestad de imputar y acusar al procesado ante el órgano jurisdiccional penal competente para que se le llame a Juicio y sea juzgado y de ser encontrado responsable de la infracción se le imponga la sanción prevista en el tipo penal, con un papel preponderante en el nuevo proceso penal acusatorio, aparece la figura del Agente Fiscal, al cual se le han otorgado nuevas facultades para que en representación del Ministerio Público pueda ejercer su papel de funcionario de perseguir a los transgresores de la ley.

El Fiscal como titular del órgano investigador de la conducta penal tiene también la titularidad del ejercicio de la acción penal pública, lo que le permite la persecución del imputado, practicando las diligencias necesarias para sustentar su acusación a la finalización de la instrucción fiscal.

“Una vez que la investigación ha arrojado resultados positivos se inicia la segunda etapa de la acción penal pública que se la ejerce ante el órgano jurisdiccional penal competente, por lo que la dinámica de la actividad del fiscal se define así:

- *Es titular de los delitos de acción pública*
- *Dirige la investigación previa fiscal preparatoria y la instrucción fiscal.*
- *Es parte obligatoria en las etapas intermedia, del juicio y de impugnaciones e interviene en todas las diligencias y actualizaciones.*
- *Requiere al juez las medidas cautelares pertinentes así como la libertad del imputado, pudiendo ordenar la detención en caso de delito flagrante, por seis horas.*
- *Asume el rol de acusar durante la etapa del juicio.”*
(www.google.com.sistemaacusatorio)

1.4. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INVESTIGACIÓN PRE-PROCESAL EN MATERIA PENAL.

Dentro del estudio de la materia penal se considera muy importante todos y cada uno de los principios que rigen una buena y excelente investigación.

Dos principios fundamentales del debido proceso son: el derecho a la defensa y el libre acceso a la administración de justicia. *“Estos se encuentran reconocidos por Constitución de la*

República en su art. 76 numerales 3 y 7,” (Constitución de la República del Ecuador, 2009, págs. 24,28,29) y además por los arts. “11, 70 2do. Inciso y 69 núm. 2 del CPP.” (Código de Procedimiento Penal, pág. 13) Justamente son esas garantías las que se les violan tanto al sospechoso como al ofendido, en su orden. No existe prohibición legal para el ofendido de conocer el contenido de los escritos presentados por el sospechoso, y viceversa. Por el contrario, la Fiscalía tiene el deber de garantizar el derecho a la defensa y a la información procesal tanto al ofendido como al sospechoso, específicamente, a informarles (entiéndase como el derecho a obtener copia del expediente, y no como otro grupo de fiscales, los menos inquisitivos, lo entienden de dejarles examinar en el despacho del fiscal para que tomen todas las notas que necesiten, cuando sea solicitado, del contenido de los escritos presentados por ambos.

“Por lo tanto el proceso penal se debe iniciar, desarrollar y concluir con observancia de los principios fundamentales, que tienen el carácter de relevantes ante cualquier otra perceptiva legal contraria, pues son orientadores de la estructura procesal y que en rigor debe entendiérselos como tal, derivados de pactos y convenios internacionales, con el carácter de obligatorios y relevantes sobre cualquier otra disposición y han sido implantados con la finalidad de configurar un conjunto de garantías que asegure a los individuos todas sus libertades, aunque en su mayor parte contenga repeticiones de las garantías constitucionales.” (Zavala Baquerizo, 2006, págs. 70, Tomo VII)

Estos principios constituyen garantías, en aras del fiel cumplimiento de la investigación dentro de una actividad reglada y garantizadora otorgando relevancia a lo sustancial sobre lo meramente formal, que funcionan no únicamente en relación al inculpado sino de todos los sujetos procesales, pero con un solo propósito que el debido proceso se materialice a lo largo y ancho de todo el proceso penal.

Durante esta fase de investigación pueden suscitarse graves conflictos cuando cualquiera de los intervinientes, pero especialmente el imputado, consideren que ésta no se encuentra agotada, puesto que no se han practicado diligencias solicitadas por ellos

mismos, en nuestro nuevo procedimiento se contempla el derecho de los intervinientes para acudir al juez de garantías, para que este haga prevalecer el debido proceso.

Una vez que el Ministerio Público practique, regido, entre otros, por los principios de legalidad y objetividad, todas las diligencias que hubiere considerado necesarias para la averiguación del hecho punible y para descubrir a sus autores, cómplices y encubridores, debe proceder a declarar el cierre de la investigación.

“Por lo que es muy importante señalar que en el proceso penal se consideran muchos los siguientes principios constitucionales;

- *Principio de legalidad.*
- *Principio de Induvio Pro Reo.*
- *Principio de Oportunidad.*
- *Principio de Defensa.*
- *Principio de Inocencia.*
- *Principio de Auto incriminación.*
- *Principio de Indefensión.*
- *Principio de Legalidad de Juzgamiento.*
- *Principio de Oportunidad.*
- *Principio de Motivación.*
- *Principio de Legalidad con validez de la prueba.*
- *Principio de Interrogatorio. ”* (Constitución de la República del Ecuador, 2009, pág. 24)

CAPITULO II

2. LA INDAGACIÓN PREVIA

Comprende los actos investigativos que se deben realizar una vez que se conozca la existencia de un hecho punible, constituye el momento en que se inicia la custodia de los objetos e instrumentos del delito, así como las de las diligencias tendentes a identificar a sus partícipes pues a través dela misma se pretende adelantar:

- Si el hecho se ha producido
- Si está previsto como punible en la ley penal,
- La procedencia de la acción penal; y,
- La determinación de las circunstancias en que éste se produjo así como la identificación de sus partícipes.

La reserva de la indagación previa no implica que ésta sea oculta o secreta, sino que sus actuaciones no pueden ser de conocimiento indiscriminado, ni sujetas a la obligación de notificación, es decir, se circunscribe únicamente a los interesados, por lo que el sospechoso puede hacer llegar elementos exculpatórios al fiscal.

Esta reserva tiene dos objetivos:

- Asegurar los resultados de la indagación preliminar; y,
- No permitir que se interfiera en el desarrollo averiguativo.

Es de precisarse que en la indagación previa el Ministerio Público puede archivar las investigaciones en caso de inexistencia de mérito suficiente para iniciar la acción penal, sin embargo estas decisiones son objeto de control judicial, y sobre todo a la intervención de la víctima a quien se debe obligatoriamente oír previo al pronunciamiento de la desestimación.

A este respecto, es básico analizar los siguientes aspectos:

- Sin perjuicio de las garantías del debido proceso, las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial para el esclarecimiento del delito durante la indagación previa, se mantendrá en reserva. Sus resultados serán conocidos durante la etapa de la instrucción.

“Los fiscales, los investigadores, los jueces, el personal policial y los demás funcionarios que, habiendo intervenido en estas actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier otro modo en peligro el éxito de la investigación, serán

sancionados conforme a lo previsto en el Código Penal. Art. 215” (Código de Procedimiento Penal, pág. 34)

Al respecto, es básico analizar tres aspectos fundamentales:

- a. La indagación previa debe desarrollarse dentro de un límite de tiempo determinado, por lo que los elementos de cargo y descargo deben ser realizadas prontamente, debiendo el fiscal practicar cuantas diligencias sean indispensables.
- b.- La resolución de apertura de la etapa de instrucción es autónoma, pues únicamente corresponde al fiscal; y,
- c.- Se establece el principio de suspensión de la investigación previa, cuando el fiscal considere que de lo actuado no aparecen suficientes elementos para iniciar la instrucción fiscal que sea por cuanto no lo hay delito o cuando hay obstáculo en las investigaciones.

La investigación termina con un cierre, momento a partir del cual se inicia la fase o etapa intermedia del proceso penal. La decisión de declarar o no concluida la investigación, es en principio, una facultad propia del Ministerio Público, congruente con la definición constitucional de que le corresponde dirigir de manera exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado.

Durante esta fase de investigación pueden suscitarse graves conflictos cuando cualquiera de los intervinientes, pero especialmente el imputado, consideren que

ésta no se encuentra agotada, puesto que no se han practicado diligencias solicitadas por ellos mismos, en nuestro nuevo procedimiento se contempla el derecho de los intervinientes para acudir al juez de garantías.

El inciso final del Art. 215 del Código de Procedimiento Penal determina que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial para el esclarecimiento del delito durante la indagación previa, se mantendrán en reserva, lo cual en la práctica judicial durante la vigencia del nuevo sistema ha determinado que en múltiples ocasiones se impida el ejercicio del derecho de defensa durante esta fase extra procesal a las personas investigadas contra las cuales más adelante se va a abrir la etapa de la instrucción fiscal, motivo por el cual se propone suprimir la reserva de estas investigaciones en lo que al sospechoso y al ofendido se refiere, aun cuando el fiscal puede guardar la reserva hacia las demás personas y la ciudadanía en general.

“Temporalidad.- La Indagación Previa es una actividad de carácter temporal pudiendo extenderse hasta por uno o dos años, de acuerdo con la pena con la que deba ser sancionado el delito que se investiga. Estos plazos deberán contarse desde la fecha que el Fiscal, llega a tener conocimiento del delito que se investiga, pese a que la propia Ley, establece el término para que la Indagación Previa tenga su fin.

Publicidad.- La reserva que policías y Fiscales deben de mantener durante el desarrollo de la Indagación Previa, se refiere al público en general, con lo que la Ley pretende en forma clara que se entienda que el secreto no comprende a las personas que como el ofendido o el sospechoso tienen el derecho de conocer las actuaciones relacionadas con la mencionada Indagación, sin que la Policía o los Fiscales puedan impedirles el acceso directo, inmediato efectivo y suficiente a la información relacionada con las investigaciones.” (Zavala Baquerizo, 2006, págs. 82,86, Tomo VII)

Como se puede observar el problema no es simple, más allá que las normas legales, son relativamente claras, para resolver este tipo de situaciones, sin embargo hemos de convenir a manera de conclusión en lo siguiente:

Que la indagación previa no es una etapa procesal, sino una instancia investigativa interna del Ministerio Público, sin embargo de lo cual, en esta, se practican diligencias que posteriormente podrían alcanzar la calidad de pruebas, razón por la cual incluso, deben estar revestidas de ciertas formalidades, sin las cuales perderían su validez y posterior eficacia probatoria, como el caso de que se hubiera receptado una versión de sospechoso sin la presencia de su Abogado Defensor o que exista un informe pericial sin antes haberse realizado el nombramiento y posesión del perito; razones estas que le otorgan una calidad especial a esta investigación de tipo penal, pero que no alcanza la calidad de etapa procesal y por tanto no se la puede catalogar como tal, para la determinación de sus efectos legales.

También estamos de acuerdo en que la primera etapa procesal, es la Instrucción Fiscal, que en doctrina deberíamos entender como aquella en la que se realiza la presentación de cargos en contra del imputado, acusaciones de las cuales el encausado deberá ejercer su derecho a la defensa, en tanto y en cuanto los hechos y la no tipificación de actos delictivos como tales, razón por la cual no es necesario tipificar en este momento procesal el delito del que se presume su participación.

La Constitución del Estado en lo que refiere acerca de la tutela jurídica ha declarado: Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento. El Estado establecerá defensores públicos para el patrocinio de las comunidades indígenas, de los trabajadores, de las mujeres y de los menores de edad abandonados o víctimas de violencia intrafamiliar o sexual, y de toda persona que no disponga de medios económicos. La que trasciende al Código de

Procedimiento Penal en una doble garantía: La inviolabilidad y la necesidad de defensor.

“En efecto, el Art. 11 del (Código de Procedimiento Penal, pág. 2) señala: La defensa del imputado es inviolable.”

El investigado tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular todas las peticiones y observaciones que considere oportunas.

Si el sospechoso está privado de la libertad, el encargado de su custodia debe transmitir acto seguido al juez, al tribunal de la causa o al Ministerio Público las peticiones u observaciones que formule, de donde se infiere una intervención continua, a través de la defensoría pública nacional que se encargará del patrocinio de los sospechosos que no hayan nombrado defensor debiendo el defensor público intervenir hasta la finalización del proceso sin perjuicio del derecho del imputado a sustituirlo. Esta exigencia legal, se presenta por cuanto en muchas ocasiones el inculpado no puede exponer su punto de vista en la forma exigida, por eso el interés del Estado de poner al lado del imputado una persona formada jurídicamente El Defensor, destinado a defender los derechos del inculpado y obligado a ejercer una defensa efectiva dentro de los límites de una actuación favorable para su defendido.

De acuerdo con lo previsto en la (Constitución de la República del Ecuador, 2009, pág. 104) y el Código de Procedimiento Penal, la Indagación Previa es una fase donde el Agente Fiscal realiza sus investigaciones con apoyo de la Policía Judicial como cuerpo auxiliar del Ministerio Público. *“La Constitución del Estado, en el Capítulo IV de la Sección Décima de la Constitución del Ecuador, le reconoce Al Ministerio Público la calidad de Organismo de Control, más no de potestad*

jurisdiccional, facultándole en su Art. 195 Ibídem la investigación pre- procesal y procesal penal.

Y de hallar fundamento, acusará a los presuntos infractores ante los jueces y tribunales competentes e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.”

La indagación previa es una actividad obligatoria de la Fiscalía, aunque el Código Procesal Penal, lo preceptúa si lo considera necesario el representante del Ministerio Público. Es imposible iniciar una instrucción fiscal, solamente con la denuncia escrita y reconocida legalmente por el ofendido o la víctima, surge la obligatoriedad de que previamente el Fiscal agote la indagación previa para investigar los hechos presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier medio le haya llegado a su conocimiento, exceptuándose los delitos flagrantes que en estos casos si el Fiscal debe incoar la instrucción fiscal en forma inmediata.

“Si durante la Indagación Previa tuvieran que adoptarse medidas para las cuales se requiere de autorización judicial, el Fiscal deberá previamente obtenerla. La indagación Previa no podrá prolongarse por más de un año en los delitos sancionados con pena de prisión, ni por más de dos años en los delitos sancionados con pena de reclusión. Estos plazos se contarán desde la fecha en la cual el Fiscal tuvo conocimiento del hecho.” (Abarca Galeas, pág. 65)

Sin embargo, si llegaren a poder del Fiscal elementos que le permitan imputar la autoría o participación en el delito a persona determinada, iniciará la instrucción aunque el plazo hubiere fenecido, siempre que la acción penal no hubiere prescrito según las reglas generales.

“Sin perjuicio de las garantías del debido proceso, las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial para el esclarecimiento del delito durante la Indagación Previa, se mantendrá en reserva.” (Vaca Andrade, pág. 36).

Sus resultados serán conocidos durante la etapa de instrucción, los Fiscales investigadores, los Jueces el personal policial y los demás funcionarios que habiendo intervenido en estas actuaciones, la divulguen o pongan en cualquier otro modo en peligro el éxito de la investigación, serán sancionados conforme a lo previsto en el Código Penal.

2.1. PRINCIPIOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES QUE RIGEN EN LA INVESTIGACIÓN PRE-PROCESAL EN EL ÁREA PENAL.

De acuerdo a la normativa prevista en nuestra legislación cabe mencionar que los principios constitucionales para obtener una buena investigación en el área penal son los que se encuentran enmarcados en el debido proceso son los que están establecidos en la ley ecuatoriana, por cuanto estos principios son la base para que todo proceso investigativo llegue a su resultado final, la autoridad designada para que investigue o que requiera una infamación tal tiene que cumplir a cabalidad lo preceptuado en la ley sin menoscabo de adulterar cada uno de los principios jurídicos, podemos manifestar que dentro de una investigación se debe de considerar los principios constitucionales que se encuentran vigentes en nuestra codificación en materia de investigación.

Sin embargo es necesario destacar que la Constitución presenta enunciados generales sobre garantías fundamentales, pues responde específicamente a técnicas legislativas y no penales, sin embargo estas se armonizan con los principios fundamentales que

contiene el Código de Procedimiento Penal, y que concentran varias garantías que hacen posible un mínimo de seguridad e igualdad frente a la persecución penal, pues no obstante el Estado acapara la función punitiva, ésta no la puede ejercer de manera absoluta "sino con sujeción a ciertos límites, entre los cuales se señala el del juicio legal, porque el destinatario de la acción penal tiene derecho a un proceso que ha de desarrollarse de manera predeterminada, sin que pueda sorprenderse con un delito y una pena no señalados con anterioridad, ni con un rito desconocido.

Por lo tanto el proceso penal se debe iniciar, desarrollando y concluyendo con observancia de los principios fundamentales, que tienen el carácter de relevantes ante cualquier otra perceptiva legal contraria, pues son orientadores de la estructura procesal y que en rigor debe entenderse como tal, derivados de pactos y convenios internacionales, con el carácter de obligatorios y prevalentes sobre cualquier otra disposición y han sido implantados con la finalidad de configurar un conjunto de garantías que asegure a los individuos todas sus libertades, aunque en su mayor parte, contenga repeticiones de las garantías constitucionales. *“Estos principios constituyen garantías judiciales, en aras del fiel cumplimiento de administrar justicia dentro de una actividad reglada y garantizadora otorgando a lo sustancial sobre lo meramente formal, que funcionan no únicamente en relación al inculcado sino de todos los sujetos procesales, pero con un solo propósito que el debido proceso se materialice a lo largo y ancho de todo el proceso penal.”* (Yazan Montenegro, pág. 48)

Es que el estado de inocencia es uno de los postulados básicos de nuestro Sistema Penal y por tanto, gozan todos los ecuatorianos, status que significa que antes y durante el enjuiciamiento penal se considera que, la persona es inocente hasta que una sentencia en firme no desvirtúe dicha aseveración. Es un principio que en la actualidad amerita en cuanto a su respeto, una mayor concienciación por parte de todos los estamentos de la sociedad pues la difícil coyuntura política en la que se desenvuelve el Ecuador permite que la profusión de denuncias especialmente por la televisión, produzca una verdadera estigmatización social de la persona que ha sido objeto de una delación o una imputación.

Es que en la praxis observamos como las imágenes de ciudadanos junto a la pronunciación de sus nombres y apellidos son vinculados con algún acto vituperable originando un adelantado reproche por parte de la colectividad. Lo más preocupante, es que si cotejamos la ingente cantidad de denuncias con el número de sentencias, llegaremos a la conclusión que la diferencia es abismal. Es necesario recalcar que un delito es insuficiente para resquebrar el estado jurídico de inocencia de la persona. *“No debemos olvidar que el proceso penal es una tortura para el imputado, por lo que es necesario identificar a los principios legales que rigen en la investigación en el área penal que son los que a continuación se detallan;*

•*Principio de legalidad.*

•*Principio de Induvio Pro Reo.*

•*Principio de Oportunidad.*

•*Principio de Defensa.*

•*Principio de Inocencia.*

•*Principio de Auto incriminación.*

•*Principio de Indefensión.*

•*Principio de Legalidad de Juzgamiento.*

•*Principio de Oportunidad.*

•*Principio de Motivación.*

•*Principio de Legalidad con validez de la prueba.*

•*Principio de Interrogatorio.”* (Constitución de la República del Ecuador, 2009, pág. 53)

2.2. DERECHO A SER INFORMADO Y EL ACCESO A LOS ELEMENTOS DE CARGO Y DESCARGO EN LA INDAGACIÓN PREVIA.

Resultaría necesario traer a colación la naturaleza pública de toda norma procesal la misma que da por realidad en materia procesal penal del derecho a ser informado de acuerdo a los principios constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna en su Art. 76 en donde hace referencia a lo que refiere al derecho de oportunidad, por lo que la norma legal es sumamente clara a lo que refiere en decir que toda persona tendrá que conocer con claridad las razones de su detención así como la de la autoridad que la ordenó y la de los responsables que hacen que se lleve a efecto tal diligencia, así mismo en lo referente al estudio del derecho a ser informado la persona que sea detenida tendrá todo el derecho a que guarde silencio y que se pueda comunicar con un familiar o con cualquier persona que él designe, por lo que también tendrá derecho a ser oportuna y debidamente informado en la lengua que el desempeñe es decir que este cúmulo de principios están garantizados para toda persona que habite en nuestro país. Por lo que en cualquier estado de una investigación los sujetos investigados pueden acceder al principio de defensa es decir que oportunamente tiene el derecho a buscar elementos que les sirvan de descargos y así demostrar que no han tenido participación en el hecho del cual son los sujetos investigados.

En esta fase del proceso penal el ofendido directamente o a través de sus representantes podrá introducir elementos de cargo y contradecir los de descargo. No existe prohibición legal para que el ofendido conozca el contenido de los escritos presentados por el sospechoso y viceversa, por el contrario la fiscalía tiene el deber de garantizar el derecho a la defensa y a la información oportuna tanto para el ofendido como para el sospechoso, específicamente a informales (entiéndase como el derecho a obtener copia del expediente y no como un grupo de fiscales, los menos inquisitivos, lo entienden en dejarles examinar en el despacho del fiscal para que tomen todas las notas que necesiten), cuando sea solicitado del contenido de los

escritos presentados por ambos. *“Bajo estos postulados constitucionales de los cuales se da acceso a que las partes investigadas tengan acceso al sistema de aportar elementos de cargos y descargos en el proceso, el Código de Procedimiento Penal ha establecido que el Ministerio Público sea el titular de la investigación Penal Pública, la misma que se divide en dos grandes grupos es decir de instancia oficial en la cual en esta partes de la investigación los elementos de cargo o de descargo los puede introducir de oficio, y la instancia particular en la que es necesaria la intervención mediante una denuncia por parte del ofendido o por medio de su representante legal, por lo que a través de este medio el investigador tendrá que buscar los elementos de acusación o de defensa.”* (Clarea Olmedo, pág. 125)

Si en algún caso el investigado se encuentra detenido o ha perdido su libertad, el encargado de su custodia debe de transmitir al Juez o Tribunal de la causa o al Ministerio Público las peticiones u observaciones que formule de donde se infiere una intervención continua a través de la defensoría pública nacional, que se encargará del patrocinio de los investigados que no hayan podido nombrar un defensor, debiendo este defensor público intervenir hasta la finalización del proceso. Dentro de nuestro estudio al presente caso es muy importante considerar que es aquí en este estado de la investigación en donde se debe de valorar la importancia que los intervinientes en el proceso tienen, por cuanto son ellos los únicos que forman parte de buscar los elementos de cargo y descargo que les servirá para que sus patrocinadores y el Ministerio Público obtenga el resultado de la investigación, pudiendo ser informado de todas y cada una de las diligencia que efectúen, es necesario acotar que durante la etapa de indagación previa todo lo que se llegue a practicar deberá de ser notificado a los investigados es decir que no podrán denegarle el derecho a la defensa y de oportunidad para que sean informados de las actuaciones realizadas y el resultado de la misma. Continuando con el análisis del inciso mencionado, es importante mencionar que estas actuaciones serán reservadas sin perjuicio de las garantías del debido proceso. *“Dos principios fundamentales del debido proceso son importantes acotar en este estudio los mismos que son; el derecho a la defensa y el libre acceso a la administración de justicia, estos se encuentran reconocidos por la Constitución de la República en su Art. 76 numeral 7, literales a y d, así como también por los arts., 70 2do. Inciso y 69 núm. 2 del Código de Procedimiento Penal, justamente son estas garantías las que se violan tanto al sospechoso como al ofendido en su orden.”* (Constitución de la República del Ecuador, 2009, pág. 53)

Por lo que no existe prohibición legal para que el ofendido conozca el contenido de los escritos presentados por el sospechoso o viceversa, por el contrario la Fiscalía tiene el deber de garantizar el derecho a la defensa y a la información procesal oportuna tanto para el sospechoso como para el ofendido, y en esta oportunidad hemos creído analizar el problema que ha venido presentando con frecuencia los poderes investidos de justicia en el Ecuador, lo que en algún momento muchos Magistrados declaran la nulidad del proceso de las indagaciones previas, bajo la premisa que el Ministerio Público se niega a cumplir con las ordenes consagradas en la Constitución Política del Estado. *“Para el citado profesor colombiano SUAREZ SÁNCHEZ el derecho a la defensa le permite al imputado intervenir en todo el desarrollo del proceso, con miras a demostrar la falta de fundamentación de la acusación, la que se inicia con la investigación previa”* (www.google.com.ec/eldebidoproceso.com)

Dicho autor señala que al sujeto pasivo del proceso (denunciado) durante la fase pre procesal le asisten los siguientes derechos: a la presunción de inocencia; a ser informado que se ha iniciado investigación previa; a ser oído en versión libre; a solicitar y controvertir los elementos de cargo; a no auto incriminarse; a estar asistido de abogado de su confianza o de oficio; a formular peticiones y presentar alegaciones, lo mismo que recibir respuestas a ellas; y, a recibir notificaciones. En un Estado de Derecho no se puede concebir la idea de que los agentes del Estado actúen de manera unilateral, negando al procesado la oportunidad de hacer valer sus derechos y controvertir lo que le sea contrario lo mismo que plantear los argumentos que le sean favorables.

2.3. LA PARTICIPACIÓN ACTIVA O PASIVA DEL OFENDIDO Y SOSPECHOSO DENTRO DE LA INDAGACIÓN PREVIA.

Al considerarse el ofendido y el sospechoso partes de la investigación es necesario manifestar que el sistema procesal penal ha establecido su participación directa en la investigación como sujetos activos, los mismos que son fuentes de información para que el Ministerio Público cuando tiene conocimiento de una noticia in crimine y de hallar

fundamentos promoverá su participación buscando la claridad del hecho y la de los presuntos infractores del mismo quienes seguirán con la sustanciación hasta la finalización del juicio. En consecuencia de lo manifestado nos queda claro que la participación del ofendido y del sospechoso en la parte investigativa del delito es indispensable, ya que son ellos los que intervienen en esta fase de averiguaciones aportando todos y cada uno de los elementos de cargo y de descargo para que el hecho que se investiga llegue a su límite, es decir a buscar a los responsables del mismo por lo que a pesar que se diga que es en esta fase de investigación es reservada ellos, sospechoso y ofendido, son los únicos que puedan acceder a tener tal información conforme lo dispone la misma ley en lo referente al debido proceso en la sustanciación de la investigación. *“Es muy importante resaltar que la participación en la defensa del sospechoso y del ofendido también puede ser guiada y orientada por un defensor el mismo que lo puede nombrar cualquiera de las partes o de oficio el Ministerio Público,”* (Moreno Nicolalde, pág. 67) el cual tiene el deber de defender en primer lugar el derecho a comunicarse con el investigado, a examinar todo en cuanto exista recaudado en el expediente, tiene derecho a interponer solicitudes probatorias como también tiene derecho a interrogar a la otra parte en el momento investigativo oportuno, sin menoscabo que en esta fase investigativa se le impida el derecho a la defensa y de oportunidad. El ejercicio de la participación activa en la fase de la indagación previa concentra deberes básicos, es decir que el investigado debe tener toda la información a fin de que se respete el caso introduciendo elementos de convicción en donde se demuestre el estado de la participación del hecho investigado, por lo que la información activa obliga a los sujetos investigados a transmitir lo adecuadamente recolectado y es ahí en donde se determina las alternativas de defensa a fin de identificar los medios de cargo o de descargo disponibles. *“Es necesario comentar que este es un derecho que tiene el sospechoso y el ofendido desde que se comienza a investigar un delito es decir desde que el Fiscal abre la indagación previa,”* (Torres Chávez, pág. 145) pues el derecho a la defensa parte de la posibilidad de sus pretensiones el mismo que busca esclarecer la naturaleza de la investigación, por lo que su participación activa evita que en el desarrollo de la indagación se vulnere el derecho de la defensa y provoque una indefensión.

CAPITULO III

3. EL DEBIDO PROCESO

El Debido Proceso es un conjunto de normas que regula los derechos y garantías con los que debe contar toda persona que es sometido a un proceso, el mismo que debe ser justo, oportuno y equitativo. *“El Debido Proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendiente a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitir tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al Juez”* (Cueva Carrión, pág. 61)

De manera general podemos decir que la función del Debido Proceso, es actuar dentro del estado de derecho para proteger a los ciudadanos del abuso de las ilegalidades que pudiere cometer un funcionario o un órgano estatal en un procedimiento legal. Simplificando el Debido Proceso es el conjunto de derechos y garantías que protegen a la persona de los posibles excesos o riesgos de abuso de la autoridad del Estado.

3.1. EL DEBIDO PROCESO EN EL ECUADOR

La primera fuente de la Institución Jurídica del Debido Proceso la encontramos en los convenios y tratados Internacionales, las Normas Constitucionales, la actual Constitución de la República que promulga un Estado Garantista. La persona que considere que se han vulnerado alguno de sus derechos o bienes jurídicos, por parte de otra persona natural o jurídica, tiene la facultad legal de acudir a los Juzgados o Tribunales Jurisdiccionales en demanda de justicia observándose el fuero legal, en razón del territorio, las cosas, las personas y de los grados.

La primera Ley de Procedimiento Penal se dictó en 1839, pues no existían tribunales Pluripersonales, todos eran singulares, sin que se pueda decir que se seguía un sistema de procedimiento definido, la redacción de las instituciones procesales penales carecían de sistematización. En 1948 el procedimiento penal ecuatoriano adoptó el sistema mixto, pues dentro de la organización del sumario se dispone el secreto de la denuncia y la orden que tanto el Juez como el fiscal están obligados a guardar reserva, bajo la pena de ser juzgados por prevaricato en caso de que faltaren a la defensa.

Desde 1939 en Ecuador se han dictado algunas leyes de procedimiento penal bajo diversos regímenes políticos, que poco a poco han alterado el sistema mixto de procedimiento. La denuncia reservada se mantuvo hasta el Código de Enjuiciamiento en materia criminal elaborado por la Academia de Abogados de Quito en 1920 quedando excluida la reserva en 1938 el mismo que en su artículo 48 expresa que la denuncia será siempre pública, pues dicho principio se mantiene en la actualidad en el artículo 44 del Código de Procedimiento Penal.

El principio de oficialidad se ha desplazado del Juez al Fiscal, que es quien tiene actualmente todos los poderes de investigaciones que antes tenía el titular del órgano jurisdiccional penal. Se dice de esta manera se ha establecido en nuestro país el sistema acusatorio que antes regía.

3.1.1. FUNCIÓN CONSTITUCIONAL DE NUESTRO ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Nuestra Constitución se refiere a los derechos, garantías y deberes que constituyen la esencia de nuestro Estado Social de Derecho. El más alto deber del estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantizan nuestra Constitución, así como también los que se encuentran en las Declaraciones, Pactos, Convenios y más Instrumentos Internacionales vigentes. Además establece como deberes primordiales del Estado asegurar la vigencia de los Derechos Humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres y la seguridad social, garantiza la vigencia del sistema democrático y la administración pública libre de corrupción. Principios como el de inocencia, derecho a la defensa, el de la motivación de las resoluciones, entre tantos otros la materialización de dichos principios requieren de la colaboración de todos quienes forman parte del engranaje jurídico legal, de las Instituciones públicas y privadas, operadores de justicia, y de manera general de todos quienes aspiramos alcanzar el bien común de la sociedad. Así el artículo 75 de la Constitución dice

“... toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita...”. Art. 76 dice que “... en todo proceso en que se determinen procesos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas...” Art. 76 numerales 1 “... corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas o derechos de las partes”; 2. “... presunción de inocencia...”; 3.

“... principio de ilegalidad”; 4. “... principio de eficacia probatoria”; 5. “... indubio pro reo”; 6. “...principio de proporcionalidad”, 7. “El derecho de las personas a la defensa”.

3.2. UJETOS PROCESALES RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN MATERIA PENAL

3.2.1. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

En la actualidad se considera al Ministerio Público como la institución encargada del ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública de modo exclusivo y privativo. No tendrá participación en los juicios de acción privada.

El Ministerio Público a través del Fiscal, interviene como parte acusadora durante todas las etapas del proceso penal de acción pública. El fiscal debe actuar con objetividad en el acopio de evidencias de cargo, como aquellas que sirvan de descargo a favor del procesado; refiriéndose a la objetividad como la capacidad crítica del representante del Ministerio Público con el fin de escudriñar, indagar o investigar el hecho criminoso y a los presuntos responsables con total imparcialidad, sentido crítico y real, excluyendo cualquier perjuicio o interés personal.

Según el Art. 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, le corresponde al Ministerio Público las siguientes atribuciones y funciones:

1. Prevenir el conocimiento de las causas penales, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y demás leyes.
2. Excitar y promover la acción penal por infracciones pesquisables de oficio.
3. Dirigir y promover la investigación pre procesal y procesal penal, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y demás leyes.
4. Conducir las indagaciones previas y la investigación procesal penal ya sea por propia iniciativa en los delitos pesquisables de oficio o por denuncia.
5. Intervenir en las causas penales, de acuerdo a lo prescrito en el Código de Procedimiento Penal y demás Leyes.
6. Emitir dictámenes en materia civil y de menores cuando así lo establezcan las leyes pertinentes sobre la materia.
7. Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía Judicial, en las indagaciones previas en las etapas del proceso penal.
8. Establecer y reglamentar un sistema de acreditación de peritos, en las diferentes disciplinas.
9. Vigilar el funcionamiento del régimen penitenciario y la rehabilitación social del delincuente.

10. Velar por la protección de las víctimas, testigos y otros participantes en el juicio penal.
11. Coadyuvar en el patrocinio público para mantener el imperio de la Constitución y de la Ley.
12. Coordinar y dirigir la lucha contra la corrupción, en colaboración con la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y demás entidades relacionadas con el tema, en el ámbito de sus competencias; y,
13. Los demás deberes y atribuciones determinados en la Constitución la Ley y los reglamentos.

“El Ministerio Público ecuatoriano ejerce su función en base a los fueros; el Ministro Fiscal General quien actúa a nivel de Corte Nacional de Justicia, los Ministros Fiscales Distritales quienes actúan a nivel de las Cortes Provinciales y los Agentes Fiscales quienes actúan a nivel de los Juzgados Penales y Tribunales Penales, cuyas funciones generales son las de defensa y patrocinio de la sociedad en los casos señalados en la Constitución y las leyes.

La gestión procesal del Ministerio Público responde a los principios fundamentales:

1. Mantener el orden constitucional del Estado en las aplicaciones relativas a las materias en las que ha de actuar el Ministerio; y,

2. La protección y defensa de personas y cosas puestas bajo el amparo del poder social en cuanto se refieren a determinadas funciones de este mismo ministerio.”
(Albán Escobar, 2001, págs. 164, 165, 166, Tomo I)

Siendo el Ministerio Público la institución encargada de investigar y descubrir el delito y su autor, tiene un papel muy importante en el desarrollo del debido proceso por cuanto en base a su resolución puede darse inicio a la acción penal.

3.2.2. OFENDIDO

Según el Art. 68 CPP “*Se denomina ofendido:*

1. Al directamente afectado por el delito y; a falta de este a su cónyuge o conviviente en unión libre, a sus ascendiente, descendientes y a los demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

El ofendido es la persona que ha sufrido daño o agravio físico, material o moral por el cometimiento de un hecho delictuoso en su contra. Se entiende que el ofendido es el directamente afectado, pero la ley prevé la falta de ofendido, que se refiere a personas carentes de derecho o imposibilitada para proceder judicialmente, y en estas condiciones se puede considerar ofendido a su cónyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, que son personas autorizadas para presentarse como parte procesal en la causa penal

2. *A los socios respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos quienes lo administren o controlen; Cuando se ha perpetrado un delito por parte de quienes administran una compañía o una sociedad de hecho o ejercen la función de control, los socios de estas están facultados para ejercer el derecho que les permite la ley. Puede ser el caso que el administrador de una empresa cometa el delito de estafa o abuso de confianza por lo que el socio de aquella es considerado ofendido y debe ser parte procesal.*

3. *A las personas jurídica, en aquellos delitos que afecten a sus intereses; Cuando se ha cometido un delito que afecte los intereses de la persona jurídica, está facultada para presentarse como parte procesal (acusador particular) y en general, ejercer los derechos del art. 69 del CPP.*

4. *A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos que afecten derechos colectivos o difusos; Significa que ofendido puede ser cualquier persona natural o jurídica a la que le afecte el cometimiento de un hecho delictuoso; porque afecta al conglomerado social o a la colectividad. El interés difuso, representa un derecho impreciso, poco claro o confuso, que aparentemente impediría que el ofendido ejerza las acciones de ley, sin embargo, el legislador al incorporar esta posibilidad permite el ejercicio pleno de las acciones penales.*

5. *A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten colectivamente a los miembros del grupo.” Un representante de las comunidades o pueblos indígenas pueda actuar como ofendido y ejercer las acciones de ley cuando se haya cometido un delito que afecte colectivamente. Pero si la infracción afecta en lo individual, no podrán ser considerados como afectados.*

3.2.3. DERECHOS DEL OFENDIDO

Según el art. 69 del CPP, los derechos del ofendido son:

1. Intervenir en el proceso penal como acusador particular; Es el principal derecho del ofendido, este puede actuar en la audiencia preliminar de la etapa intermedia, en la audiencia de juzgamiento en la etapa de juicio, y además puede interponer los recursos que sean necesarios en las instancias superiores.

2. Ser informado por el Ministerio Público sobre el estado de la indagación pre procesal y de instrucción; El ofendido tiene el derecho de recibir toda la información pre procesal y de la instrucción que con motivo de la investigación, el agente fiscal haya podido obtener sobre la existencia del delito y los fundamentos por los cuales se presuma el grado de participación criminal del procesado.

3. Ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si fuere conocido, aun cuando no haya intervenido en él; Es importante además que el ofendido reciba toda la información del resultado final del proceso, para así poder saber cuáles son sus derechos.

4. presentar ante el fiscal superior quejas respecto de la actuación del agente del Ministerio Público, en los casos siguientes:

- a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la investigación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que fue

solicitada.

b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la actividad investigativa;

c) Cuando la inadecuada actuación del fiscal ponga en riesgo la obtención o conservación de vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba; y,

d) En general cuando hubieren indicios de quebrantamiento de las obligaciones del fiscal.

5. Otro derecho del ofendido es poder presentar quejas ante el fiscal superior, es decir, si la queja es a cerca de las actuaciones u omisiones de un Agente Fiscal, el superior inmediato será el Ministro Fiscal Distrital, si la queja es por las actuaciones u omisiones del Ministro Fiscal Distrital, la queja se elevará ante el Ministro Fiscal General; pero si la queja es a cerca de las actuaciones u omisiones del Ministro Fiscal General, no existe un organismo sancionador de sus actuaciones, es decir no existe una entidad superior que lo sancione o fiscalice.

Pero a mi entender, quien debería vigilar sus actuaciones tendría que ser la autoridad nominadora, es decir la Asamblea Nacional.

Solicitar al Juez de turno que requiera al fiscal, que en el término de quince días se pronuncie si archiva la denuncia o inicia la instrucción fiscal. Para el ejercicio de este derecho se requiere haber interpuesto previamente la queja a la que se refiere el

numeral anterior, y, que esta no haya sido resuelta en el término de quince días;

Solamente si el ofendido ha elevado una queja al fiscal superior, puede pedir al Juez que requiera al fiscal para que se pronuncie con respecto a la denuncia presentada; y ante este requerimiento el fiscal deberá contestar por escrito al Juez penal.

6. A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la policía, el fiscal, el Juez y el tribunal adopten para ello los arbitrios necesarios, sin menoscabo de los derechos del procesado;

Es muy importante que se proteja al ofendido, pero la protección debe extenderse hasta su entorno familiar, ya que en este medio social es donde se desarrolla la intimidad del ofendido.

7. A reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria, conforme con las reglas de este Código, haya propuesto o no acusación particular.

Lo más importante de este numeral, es que no es necesario que el ofendido se presente como parte y actúe como acusador particular, para que sea acreedor al derecho de reclamar indemnizaciones civiles.

3.2.4. PROCESADO O ACUSADO

Según el art. 70 CPP, *“Se denomina procesado o procesada a la persona a quien la fiscal o el fiscal atribuya participación en un acto punible como autor, cómplice o encubridor y acusado, la persona contra la cual se ha dictado auto de llamamiento a juicio o contra la cual se ha presentado una querella”*.

3.2.4.1. PROCESADO

“Procesalmente el procesado aparece en la resolución de iniciación de la etapa de la instrucción fiscal y se mantendrá en tal calidad hasta que se ejecutorie el auto de llamamiento a juicio que se haya dictado en su contra.

La palabra procesado es nueva dentro del léxico jurídico ecuatoriano, pues vino incluida en el Nuevo Código de Procedimiento Penal, en la última reforma de fecha 24 de marzo de 2009: en primer lugar debe entenderse al procesado siempre como una persona natural, pues los hechos punibles los cometen los seres humanos.

El término procesado es genérico, pues abarca desde la indagación previa, pasando por la etapa de instrucción fiscal y concluyendo en la audiencia preparatoria del juicio y formulación del dictamen y el desarrollo de la etapa intermedia del proceso penal.

El único que puede atribuir a una persona la calidad de procesado es el fiscal, ya que es el encargado de recepcionar una denuncia y efectuar las investigaciones procesales.” (Albán Escobar, 2001, págs. 178, 179, Tomo I)

Desde que el Juez dicta el auto de llamamiento a juicio, el procesado toma el nombre de acusado, porque a criterio del Juez de Garantías Penales, de los resultados de la instrucción fiscal se ha desprendido presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre la participación del procesado.

El procesado toma el nombre de acusado cuando el ofendido ha presentado la acusación particular cuando se trata de delitos de acción pública, luego que el fiscal ha emitido el dictamen al finalizar la instrucción fiscal; y tratándose de delitos de acción privada desde el momento en que el ofendido presenta la acusación particular o querella ante el Juez de Garantías Penales.

3.2.4.2 ACUSADO.

El acusado es el sujeto pasivo del proceso penal que por su presunta vinculación con un hecho punible de acción pública ha sido llamado a la etapa de juicio, etapa en la que se practican los actos procesales necesarios para la comprobación conforme a derecho de la existencia de la infracción o la responsabilidad del acusado.

“Con la Constitución y el nuevo Código de Procedimiento Penal, se considera al acusado como un sujeto poseedor de derechos y como tal, titular de un conjunto de facultades cuya restricción es excepcional, así:

1. Inviolabilidad del derecho a la defensa en cualquier etapa del juicio penal; el derecho a la defensa implica que:

a) Se le reconozca su calidad de parte procesal.

b) Que pueda comparecer en igualdad de condiciones en el juicio ante un Juez imparcial.

- c) *Que exista una imputación clara precisa y circunstanciada.*
- d) *Que tenga acceso a toda información que exista en su contra de modo oportuno.*
- e) *Que pueda nombrar un defensor particular y en caso contrario, el Estado debe proporcionarle un defensor de oficio.*
- f) *A ser escuchado en la audiencia de formulación de cargos.*

- 2. *Contradecir las pruebas en el mismo momento en que se las actué o recoja.*
- 3. *Se mantiene el principio de inocencia en el proceso hasta el momento en que se lo declare culpable, porque la inocencia no solamente es un principio sino un derecho.*
- 4. *Se garantiza su libertad hasta cuando haya sentencia condenatoria y ejecutoriada.*
- 5. *Derecho a expresar los argumentos necesarios en su defensa antes de que se expida la sentencia.*
- 6. *Derecho a que no se le obligue a incriminarse.*
- 7. *Derecho a que la decisión que se expida sea debidamente motivada.*
- 8. *Derecho a que se cumplan las reglas del debido proceso, consagradas en el Art. 76 de la Constitución de la República y en los tratados internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano.” (Albán Escobar, 2001, págs. 164, 165, Tomo I)*

3.2.5. DEFENSOR PÚBLICO

“El defensor público es una especie de autocontrol del Estado se impone para dar mayor seguridad jurídica a los gobernados. Su papel consiste en defender a todas las personas frente a las acciones u omisiones de la administración pública y de sus agentes, que de algún modo puedan violar el goce y ejercicio de los derechos y libertades garantizados en la constitución y en los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por el Estado”. (Chiriboga Zambrano, 1995, pág. 40)

El Art. 191 del Constitución dice: *“La Defensoría Pública es un Órgano Autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica en los derechos de las personas, en todas las materias e instancias. La defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, económica y financiera; estará representada por la Defensora Pública o el Defensor Público General y contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalente a los de la Fiscalía General del Estado”.*

Según el Art. 74 CPP. *“La Defensoría Pública Nacional tendrá su sede en la capital de la República y competencia en todo el territorio del país; y, se encargará del patrocinio de los procesados que no hayan designado defensor”.*

Art. 78 CPP. *“El defensor público está obligado a actuar hasta el momento en que el procesado designe su defensor privado y éste asuma el cargo”.*

La Defensoría Pública Nacional tendrá bajo su responsabilidad el patrocinio de los procesados que no hayan designado abogado defensor, a través de los defensores públicos.

Además, el art. 76 nrl. 7 ltl. e) de la Constitución dispone que ninguna persona puede ser interrogada por una autoridad Policial, de la fiscalía o cualquier otra autoridad, sin la asistencia de un abogado defensor particular o nombrado por el Estado, la inobservancia de este mandato constitucional transforma en ineficaz a cualquier diligencia jurídica. Según el art. 253 del CPP, el defensor de oficio procede en dos ocasiones:

- a) Cuando el abogado defensor no comparece en defensa del procesado.

De este modo se dice que se logra precautelar que el acusado cuente con un abogado para evitar que quede en la indefensión

- b) Cuando se aleja de la audiencia.

Es decir cuando su abogado defensor se aleja de la sala de audiencia.

3.2.6. JUEZ O JUEZA DE GARANTÍAS PENALES

“El Juez o Jueza es quien decide interpretando la ley o ejerciendo su arbitrio, la contienda suscrita o el proceso promovido. En este aspecto técnico, el Juez ha sido definido como el magistrado, investido de imperio y jurisdicción, que es la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y que según su competencia, pronuncia decisiones en juicio”. (Cabanellas De Torres, 1998)

El Juez de garantías penales es la autoridad judicial que garantiza los derechos del ofendido y del procesado durante la etapa de instrucción fiscal con lo cual da cumplimiento a las normas del debido proceso consagradas en la Constitución de la República y en los tratados internacionales ratificados por el Estado.

Según el art. 27 del CPP, dice: los Jueces o Juezas de garantías penales tienen competencia:

1. Para garantizar los derechos del procesado y del ofendido durante la etapa de instrucción fiscal conforme a las facultades y deberes de este código

De este modo, el Juez o Jueza de garantías penales se transforma en Juez constitucional para vigilar que se cumplan con las garantías establecidas en la Constitución y en la Ley; asegurando un trato humano y digno durante el curso del proceso, es decir haciendo prevalecer el principio de legalidad e inocencia, hasta que en la sentencia ejecutoriada se lo declare culpable.

2. Para tramitar y resolver en audiencia en la fase de indagación previa y etapa de instrucción fiscal, la adopción, exención, revisión, fijación de plaza y control de necesidad de mantención de medidas cautelares.
3. Tramitar y resolver en audiencias las solicitudes de archivo procesal, desestimaciones, acuerdos reparatorios, suspensiones, condiciones al procedimiento y conversiones.
4. Tramitar y resolver en audiencia el juzgamiento de delitos de acción privada.

5. Conocer y resolver las solicitudes que se presenten en la audiencia preparatoria.
6. Conocer y, de ser el caso, dictar correctivos en audiencia para subsanar posibles violaciones o limitaciones a los derechos del procesado, en razón de actuaciones ilegítimas de la fiscalía o policía.
7. Conocer y resolver solicitudes temporales de mantención de reserva de elementos de convicción y otros documentos hasta que se efectúen ciertas prácticas investigativas.
8. Determinar, con base a los elementos de convicción, el monto de los daños y perjuicios causados, para garantizar la reparación de los ofendidos.
9. Ejecutar la sentencia condenatoria en lo referente a la reparación económica; y
10. Las demás previstas en la Ley.

El Juez o Jueza, pueden aceptar el procedimiento abreviado que consiste en la transformación que se da de un proceso de acción pública a un proceso de acción privada, se lo puede proponer hasta la clausura del juicio y solo si se trata de un delito que tenga prevista una pena máxima inferior a cinco años.

La Legislación ecuatoriana categoriza a los Jueces y Juezas penales según el fuero del procesado o acusado; así a los acusados que gocen de fuero común, les corresponde que su proceso sea tramitado por un Juez de primera instancia, o un Juez aquo, función que le corresponde a un Juez penal del domicilio del acusado.

Si el procesado tiene fuero especial, el cual depende de la dignidad que este desempeñe en la administración pública, y el grado que ostenten tendrá fuero de Corte Provincial o fuero de Corte Nacional, lo cual significa que su Juez o Jueza natural será el Presidente/ta de la Corte Provincial de Justicia o el Presidente/ta de la Corte Nacional de Justicia según el caso.

El dictamen fiscal debe ser puesto en conocimiento del Juez o Jueza al término de la etapa de instrucción, puesto que el Juez o Jueza es el vigilante en la etapa de instrucción; y este dictamen emitido por el fiscal puede ser acusatorio o absolutorio.

- 1.- Cuando existe dictamen fiscal acusatorio y si el Juez o Jueza, considera que de los resultados de la instrucción fiscal, se desprenden presunciones graves y fundadas de la existencia del delito y sobre la participación del procesado como autor, cómplice o encubridor, dictará auto de llamamiento a juicio, en el cual ordenará las medidas cautelares de carácter real o personal.

Si el Juez o Jueza considera que los resultados de la instrucción fiscal no ameritan el auto de llamamiento a juicio, podrá archivar el proceso. Para el caso de delitos penados con reclusión, el Juez o Jueza tiene la obligación de elevar en consulta su providencia al superior, la misma que será confirmada o revocada.

- 2.- Si existe dictamen absolutorio, y si el Juez o Jueza considera necesaria la apertura del juicio o si existe acusación particular, ordenará que se remitan las actuaciones del fiscal al fiscal superior para que acuse o ratifique el pronunciamiento del inferior. Si el pronunciamiento del inferior es ratificado, el Juez o Jueza debe admitir el dictamen fiscal y dictar auto de sobreseimiento. Si no hay acusación fiscal, no hay juicio.

Tratándose de delitos sancionados con pena de reclusión, la consulta al fiscal superior, de parte del Juez será obligatoria.

El Juez o Jueza penal actúa dentro de la etapa intermedia, si el Juez o Jueza considera que de los resultados de la instrucción fiscal, se desprenden presunciones graves y fundadas de la existencia del delito y sobre la participación del procesado como autor, cómplice o encubridor, dictará auto de llamamiento a juicio en la audiencia preliminar, con lo cual el proceso pasa a conocimiento del Tribunal Penal correspondiente, siempre y cuando las partes no interpongan recursos como el de nulidad y/o el de apelación, que llegan al conocimiento de la instancia superior según el fuero del acusado.

3.2.7. TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES

“Es un conjunto de Jueces, Juezas o magistrados, magistradas que están obligados a administrar colegiadamente justicia en un proceso o instancia. El tribunal de garantías penales, constituye la etapa más importante del proceso penal y está conformado por un presidente/a y dos vocales y demás personal auxiliar”. (Cabanellas De Torres, 1998, pág. 316)

El Código Orgánico de la Función Judicial, no contempla al Tribunal de Garantías Penales, le asemeja con el Juez o Jueza de garantías penales, pero debemos considerar que a partir de la vigencia del nuevo CPP, se dieron funciones específicas a los Jueces y Juezas de garantías penales y a los Jueces/as o magistrados/as que conforman los tribunales penales; y al dividir al proceso en etapas, la Corte Constitucional juega un papel importante en el juzgamiento y en la aplicación del debido proceso.

El Tribunal de Garantías Penales, interviene directamente en la etapa de juicio en la audiencia de juzgamiento como juzgador y es en esta audiencia en donde las partes deben presentar las pruebas de cargo o descargo. Tomemos en consideración que para que las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción fiscal alcancen el valor de

prueba deben ser presentadas y valoradas en la etapa de juicio, función que le corresponde al Tribunal de Garantías Penales en pleno. Ya que según el Art. 79 del CPP las pruebas deben ser producidas en el juicio, ante los tribunales penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes, que serán practicadas por los Jueces/as de garantías penales.

Mediante las pruebas presentadas en juicio, los Jueces/as que conforman el Tribunal las valoran y puedan tener un criterio claro y preciso para dar su veredicto o para dictar sentencia.

En cada juicio penal deben intervenir como adversarios, un acusador y un acusado, mientras que los miembros del tribunal de garantías penales, se mantienen como espectadores y posteriores evaluadores de lo que hayan visto y oído, tutelando los derechos constitucionales como organizadores del debate, reservando su criterio hasta el momento en que la ley, les exija pronunciarse a favor de la acusación o de la defensa según el mérito de la prueba y de la ley.

3.3. EL DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL

Cuando se habla del debido proceso como garantía constitucional hay que insistir en que apareció junto con la protección de los derechos humanos; esto es, el derecho a tener jueces imparciales, a ser oído en todas las instancias y a tener un proceso justo y observando el respeto a todas las garantías fundamentales. El concepto del debido proceso ha evolucionado, es así que de un proceso legal se pasa a un proceso constitucional, es decir, que se ha dotado a esta garantía fundamental de principios y presupuestos que concilien con las garantías procesales, con el fin de que se haga efectivo el desarrollo de los derechos fundamentales de todo ciudadano.

Al respecto, Osvaldo Gozaíni enuncia:

“Con la constitucionalización del proceso se evade y posterga la noción de exigencia individual o derecho subjetivo público. Queremos significar, así, que el debido proceso es aquel que no tiene fronteras ni características por Estado. Es una noción unívoca que obliga a adaptaciones singulares y estándares propios que afinan, al unísono, en la garantía procesal por excelencia”.

Y agrega:

“En suma, la constitucionalización del proceso supone crear condiciones para entender lo que ‘es debido’. No se trata ahora de un mensaje preventivo dirigido al Estado, ni de asegurar los mínimos exigibles en el derecho de defensa; hay una construcción específica que comienza desde la entrada al proceso y continúa a través de toda la instancia culminando con el derecho a una sentencia suficientemente motivada, que pueda ser ejecutada y cumplida como los jueces han ordenado”. (Gozaíni, 2004, págs. 26,27)

Al haberse incorporado el instituto del debido proceso a la Constitución de la República, se efectiviza este presupuesto; al ser una norma suprema, es obvio que las normas secundarias deben estar siempre sujetas a ella y, por lo tanto, al ser el debido proceso una garantía de rango constitucional, es de estricto cumplimiento en todos los ámbitos de orden público, debiendo aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos. Desde esta perspectiva, todos los órganos de la administración pública están en la obligación de respetar y hacer respetar todos aquellos principios y derechos invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada y específicamente los contemplados en los Arts. 11, 75, 76, 77 y 82 de la Constitución de la República.

Por su lado, el Art. 168 de la Constitución de la República, en el numeral 6, consagra que:

“La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.”. Y el Art. 169 ibídem, establece: “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.”

En síntesis, podemos manifestar que en salvaguarda al debido proceso constitucional ninguna persona natural puede ser privada de los derechos y garantías fundamentales que consagra la Constitución de la República, esto es, a tener un procedimiento abreviado y simple, y a disponer del proceso por el cual se le está juzgando, pues no es un fin, sino un medio idóneo para hacer prevalecer el principio de que el sistema procesal “será un medio para la realización de la justicia”, es decir, que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo acto.

3.4. EL DERECHO A LA DEFENSA COMO UN PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO

Esta garantía constitucional consiste en el derecho que tiene toda persona de intervenir en un proceso penal desde el inicio hasta la resolución del mismo, siempre y cuando se encuentren comprometidos sus derechos, de tal suerte que deba participar para proteger dichos derechos. En materia penal este derecho está más enfocado al procesado. Es necesario aclarar que esta garantía es exigible desde el inicio de la indagación previa, que es etapa pre procesal, de conformidad al inciso 2do. del Art. 70 del Código de Procedimiento Penal que señala que *“El procesado y el acusado tienen los derechos y garantías previstos en la Constitución y demás leyes del país, desde la etapa pre procesal hasta la*

finalización del proceso.”

Para que opere este derecho no es necesario que se dicte la resolución de inicio de instrucción fiscal, sino que basta con la imputación que se haga en contra de una persona y que dé origen a la indagación previa.

“El Derecho de Defensa es un derecho fundamental e imprescindible en un debido proceso. Es el derecho subjetivo público individual del imputado de acreditar su inocencia o cualquier circunstancia capaz de excluir o atenuar su responsabilidad; constituye una actividad esencial del proceso, integrando el triángulo formal de la justicia represiva, en cuanto nadie puede ser condenado sin ser oído ni defendido.”
(Vélez Mariconde, 1986., pág. 377)

En conclusión, el derecho de defensa ampara al procesado imputado desde la etapa pre procesal denominada indagación previa hasta la sentencia que decide la situación del acusado. El derecho a la defensa no puede ser limitado por el órgano jurisdiccional por cuanto constituye un requisito preponderante para la validez del proceso. Aquí algunas de las garantías que abarca el derecho a la defensa:

3.4.1. PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM.

El principio non bis in idem depende de la observancia de los derechos fundamentales que hacen válido un proceso penal y por lo tanto la sentencia que el tribunal juzgador haya dictado dentro de este proceso.

La sentencia ejecutoriada que se sustenta en un proceso penal libre de toda violación a los derechos fundamentales- tiene la autoridad de cosa juzgada (non bis in idem material), lo que quiere decir que una persona no puede ser juzgada más de una vez por el mismo delito. Este principio también abarca el hecho de que una persona no puede ser procesada al mismo tiempo en dos procesos diferentes (non bis in idem procesal). Entonces, para que opere esta garantía constitucional es necesario que la persecución penal recaiga sobre la misma persona y que el hecho punible sea el mismo, aclarando que no es necesaria una identidad absoluta en los supuestos de hecho, sino que sólo se debe mantener la estructura básica de la hipótesis fáctica.

Este principio está contenido en la letra i) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República, que señala que se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá entre otras la siguiente garantía:

- i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.

De igual forma, se encuentra contemplado en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8.4 de la Convención Americana.

Es necesario aclarar que si en el proceso penal se han violado las reglas mínimas que comprende el debido proceso, la resolución que el órgano jurisdiccional haya dictado es inválida, carente de toda fuerza legal y por lo tanto no puede alegarse el principio en referencia.

3.4.2. PRINCIPIO DE CELERIDAD.

“El proceso público no puede tener dilaciones injustificadas. La investigación y las diferentes etapas de la actuación procesal deben estar sometidas a términos rigurosos y de estricto cumplimiento.” (García Valencia, 2005, pág. 75)

Este principio del debido proceso, propio de un Estado constitucional de derechos, tiene que ver con la duración del proceso penal, con la economía procesal. Aclarando que esta garantía es aplicable en todo tipo de proceso.

“La actividad investigativa del fiscal debe tener un límite en el tiempo. La presentación de la acusación y la convocatoria al juicio oral se tienen que decidir en términos razonables y el juicio se debe evacuar con prontitud, justificándose la mora para adelantar estas etapas, únicamente por la salvaguarda de las garantías sustanciales.” (García Valencia, 2005, pág. 76)

Es cierto, que en ocasiones, el proceso penal se dilata de acuerdo a su desarrollo, sin embargo cuando se alarga irrazonablemente sin justificaciones válidas y tolerables, se está vulnerando este principio. Este derecho garantiza que el proceso penal se desarrolle sin dilaciones indebidas en su tramitación, que puedan ser imputables al órgano jurisdiccional por su negligencia o inactividad.

3.4.3. SER OÍDO ANTE UN JUEZ IMPARCIAL, INDEPENDIENTE Y COMPETENTE.

Para muchos tratadistas, este es el principio más importante del debido proceso dentro del sistema procesal penal. Es tanta la importancia de este principio porque el juez o tribunal penal es el que decide acerca de la libertad de una persona que está siendo procesada.

Esta garantía consagrada en nuestra Constitución, exige que el tribunal unipersonal o pluripersonal que va a dictar la correspondiente sentencia dentro del proceso penal no tenga algún interés particular que le impida aplicar correctamente el derecho penal.

El principio en referencia no sólo consta dentro de nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución de la República, sino también se encuentra desarrollado dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, el mismo que comprende entre otras cosas las atribuciones y deberes de los órganos jurisdiccionales, establecidos en la Constitución y la ley; la jurisdicción y competencia de las juezas y jueces. Al respecto, en sus artículos 7, 8 y 9, señala lo siguiente:

“a) que la jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley; b) no ejercerán la potestad jurisdiccional los jueces o tribunales de excepción ni las comisiones especiales creadas para el efecto; c) los jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla, son independientes incluso frente a los demás órganos de la Función Judicial; y, d) la actuación de los jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley”.

3.5. LAS NORMAS DEL DEBIDO PROCESO SE VEN AFECTADAS O NO POR LA RESERVA DE LA INDAGACIÓN PREVIA.

Se puede afirmar de manera inequívoca que la actual Constitución del Ecuador, vigente desde el año 2008, constituye una nueva etapa en la evolución del Derecho Constitucional Ecuatoriano y de cuyo contenido es menester resaltar su especial orientación a la vigencia efectiva de aquellos derechos fundamentales de la persona. La relevancia de ese conjunto de derechos se observa en el inicio del cuerpo normativo precitado, que en su preámbulo resalta la fidelidad del pueblo ecuatoriano a los ideales de libertad, igualdad,

justicia, progreso, solidaridad equidad y paz, los mismos que le han servido de guía e inspiración en su largo transitar a través de la historia, dentro de un procedimiento toda norma debe ser bien aplicada para que esta no surja con efectos secundarios, es decir más bien que las normas del debido proceso aplicadas de acuerdo al derecho no afectan a que se investigue a una persona o que se abra una investigación, por lo que más bien ayudaría a un buen desarrollo y las partes aportarían al esclarecimiento del hecho investigado. Por lo que precisamente como lo indica un concepto procesal, en lo referente a nuestra legislación nos comprende a establecer que el Debido Proceso son un conjunto de normas jurídicas para llevar adelante un buen desarrollo de un procedimiento y en especial las garantías básicas previstas en la Constitución Política del Estado, en su Art. 76 con sus 7 numerales los cuales nos permiten llevar un proceso en cualquier área, ya que el debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendiente a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones. Ha existido desde el punto de vista de la doctrina, cierto debate en cuanto a cuál es la naturaleza jurídica del debido proceso, algunos autores han llegado a mencionar que se trata de un principio general del derecho y que si este es bien aplicado no tiene que afectar a ningún procedimiento por lo que la reserva de la indagación previa no se verá afectada siempre y cuando se lleve el procedimiento establecido para la investigación.

“El profesor John Rawls en su obra El debido Proceso TEMIS1996, expresa que es aquel razonablemente estructurado para averiguar la verdad, de formas consistentes con las otras finalidades del ordenamiento jurídico, y también Arturo Hoyos dice; Que es una institución instrumental en virtud de la cual se debe averiguar a las partes en todo el proceso, es decir que si hay oportunidad para que las partes ejerzan el derecho de aportar elementos lícitos relacionado con el objeto del proceso.” (www.google.com.eldercho.com)

Si bien la institución jurídica del debido proceso está vinculada a varias esferas del derecho, es en el ámbito penal donde adquiere su mayor relevancia en atención al valor de los bienes jurídicos comprometidos, en especial, el de la libertad personal. “El artículo 76 del Estatuto del Estado estatuye que; el Estado reconoce y asegurará a las personas el derecho al debido proceso.

Las garantías dentro de una investigación previa han garantizado mucha importancia ya que es en esta parte de la investigación que los sujetos encargados de la investigación, violan garantías Constitucionales de orden procesal, puesto que no siguen el camino correcto para la obtención de su resultado, en la persecución del delito hasta la ejecución completa de la sentencia. Pues debemos aclarar que el debido proceso debe de cumplirse en toda área de investigación constituyendo a que se dé una correcta aplicación de la ley, pues este es el remedio para prevenir la arbitrariedad de las violaciones en las indagaciones previas y es la forma a que las partes se queden en indefensión y sin ejercer el derecho a la defensa, por lo que el debido proceso es una justicia adecuada a la medida de la dignidad humana, pues con una correcta investigación se obtendrá una excelente condena, la misma que debe ser garantista de un procedimiento adecuado y en cumplimiento a lo que exige un estado de derecho para lo que a continuación analizaremos el Art 76 de la Constitución del Ecuador:

“Art. 76.- Garantías del Debido Proceso.-

Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia.

- 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.*
- 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.*
- 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.*

4. *Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.*
5. *En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.*
6. *La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.*
7. *El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:*
 - a) *Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.*
 - b) *Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.*
 - c) *Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.*
 - d) *Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.*
 - e) *Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.*
 - f) *Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.*

- g) *En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.*
- h) *Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.*
- i) *Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.*
- j) *Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.*
- k) *Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.*
- l) *Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.*
- m) *Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.* ” (Constitución de la República del Ecuador, 2009, pág. 53)

CAPITULO IV

4. INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Se utilizará la investigación de campo, puesto que se recurrirá al Ministerio Público así como también los demás organismos de la Función Judicial de la Provincia de Pichincha para obtener de esas fuentes, la información necesaria para la investigación. También se adoptará la investigación de tipo bibliográfica, puesto que se tomarán referentes de libros, revistas, links y resultados de otras investigaciones.

4.1. NIVEL O TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo a la complejidad del estudio la investigación será:

EXPLORATORIA.

Por qué se indagará los conocimientos, experiencias, capacidades y falencias de los involucrados en el desarrollo de la Indagación Previa en la Provincia de Pichincha.

DESCRIPTIVA.

Por qué se describirá cualitativamente las categorías del fenómeno y sujetos a investigarse.

NO EXPERIMENTAL.

Porque el fenómeno será estudiado tal cual sucede, influido únicamente por las variables del contexto.

PROPOSITIVA.

Porque se diseñará una propuesta alternativa orientada hacia la solución del problema.

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN

CUASI EXPERIMENTAL:

Ya que se pretende experimentar, basándose en hechos que son reales y que están presentes al momento de la investigación. Se aprovechará los fenómenos producidos accidental o naturalmente, y se los analizará para sacar conclusiones.

MÉTODO DEDUCTIVO:

Debido a que partirá de premisas generales para luego analizar las particularidades del fenómeno en estudio.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS:

Serán utilizados como medio de comprobación y veracidad.

4.1.1. TÉCNICAS. DE LA INVESTIGACIÓN

ENTREVISTAS

Dirigida a los Miembros de los Tribunales Penales de la Provincia de Pichincha.

ENCUESTAS:

A los Fiscales de la Provincia de Pichincha.

4.1.2. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Guías de entrevistas

Formulario de encuestas.

4.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA.

Para la investigación participarán como informantes: Los Agentes Fiscales de la Provincia de Pichincha, a los Miembros de los Tribunales Penales, y Abogados en el libre ejercicio de la profesión.

Dentro de la investigación se ha considerado la siguiente población:

5 Agentes Fiscales.

3 Miembros de los Tribunales Penales.

10 abogados en el libre ejercicio

10 estudiantes que se encuentren realizando las pasantías en el Ministerio Público

4.2. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información primaria será tomada de los Agentes Fiscales de la Provincia de Pichincha, de los Miembros de los Tribunales Penales de la Provincia de Pichincha Abogados en el libre ejercicio de la profesión. Se lo hará a través de entrevistas y encuestas. La

información secundaria será obtenida de fuentes bibliográficas actualizadas, documentos, instructivos, y registros oficiales, así como el de la información vía a Internet, que servirá de sustento para el marco teórico, el análisis imperativo de los resultados y el planteamiento de la propuesta de campo.

4.1.4. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

ABOGADOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE JURISPRUDENCIA.

Distinguidos Abogados:

La presente encuesta tiene como objetivo verificar si se aplica correctamente la Reserva de la Indagación Previa frente a las normas del Debido Proceso en el Ministerio Público. Su veracidad al momento de resolver las siguientes preguntas, aportará datos confiables para la elaboración del presente trabajo investigativo jurídico de campo.

1.- Está Ud. en libre ejercicio de la Profesión?

SI ()

NO ()

2.- ¿Es de su conocimiento si la reserva de la indagación previa deja en indefensión a las partes investigadas?

SI ()

NO ()

3.- ¿Considera usted que en la indagación previa se les permite tener acceso y sacar copias al expediente a los investigados?

SI ()

NO ()

4.- ¿Diga usted, si los Agentes Fiscales al momento de iniciar una indagación previa, citan y notifican de conformidad a lo dispuesto en el Art.27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público?

SI ()

NO ()

5.-¿Conoce usted, si en la indagación previa se cumple con un debido proceso durante la investigación?

SI ()

NO ()

ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA.

**Distinguidos Estudiantes que se encuentran realizando las pasantías en el
Ministerio Público de Pichincha:**

La presente encuesta tiene como objetivo verificar si se aplica correctamente la Reserva de la Indagación Previa frente a las normas del Debido Proceso en el Ministerio Público. Su veracidad al momento de resolver las siguientes preguntas, aportará datos confiables para la elaboración del presente trabajo investigativo jurídico de campo.

1 ¿Está Usted al momento realizando pasantías en el Ministerio Público de Pichincha?

SI () NO ()

2.- ¿Conoce usted si la reserva de la indagación previa deja en indefensión a las partes investigadas?

SI () NO ()

3.- ¿Considera usted que en la indagación previa se les permite tener acceso al expediente a los investigados?

SI () NO ()

4.- ¿Diga usted, si los Agentes Fiscales al momento de iniciar una indagación previa, citan y notifican de conformidad a lo dispuesto en el Art.27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público?

SI () NO ()

5.- ¿Conoce usted, si en la indagación previa se cumple con un debido proceso durante la investigación?

SI () NO ()

MINISTERIO FISCAL

MINISTERIO PÚBLICO DE PICHINCHA

La presente encuesta tiene la finalidad de constatar si se está realizando correctamente las Indagaciones Previas frente a las Normas del Debido Proceso en el Ministerio Público en la Provincia Pichincha. Se les solicita que responda con sinceridad a las preguntas que se plantean, lo cual permitirá aportar datos confiables a la presente investigación:

1.- ¿Cree usted conveniente que en el Ministerio Público en la Provincia de Pichincha se están aplicando correctamente las Indagaciones Previas conforme a las normas del Debido Proceso contempladas en la Constitución del Estado en concordancia con el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público?

2.- ¿Conoce usted, si los Agentes Fiscales citan y notifican según lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público?

3.- ¿La reserva del Agente Fiscal en la Indagación Previa deja en indefensión a las partes?

4.- ¿Considera usted, que si se inicia una indagación previa debería cumplirse con lo dispuesto en el Art. 76 de la Constitución Política del Estado?

5.- ¿Cree usted, que hay una contraposición de norma entre el Art. 215 del Código de Procedimiento Penal y el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio?

4.3. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Los datos que se obtuvieron mediante la aplicación de los instrumentos de investigación son los siguientes:

4.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información será analizada y revisada en forma crítica realizando las correcciones pertinentes para depurar la información, para efecto de un procesamiento rápido y óptimo se procederá a codificar los datos. La información será tabulada a través de tablas estadísticas y representada gráficamente en código de barras las que permitirán una concreta visualización de los resultados obtenidos, los mismos que se describirán, analizarán e interpretarán con el sustento del marco teórico.

4.5. ELABORACIÓN DE GRÁFICOS Y CUADROS ESTADÍSTICOS.

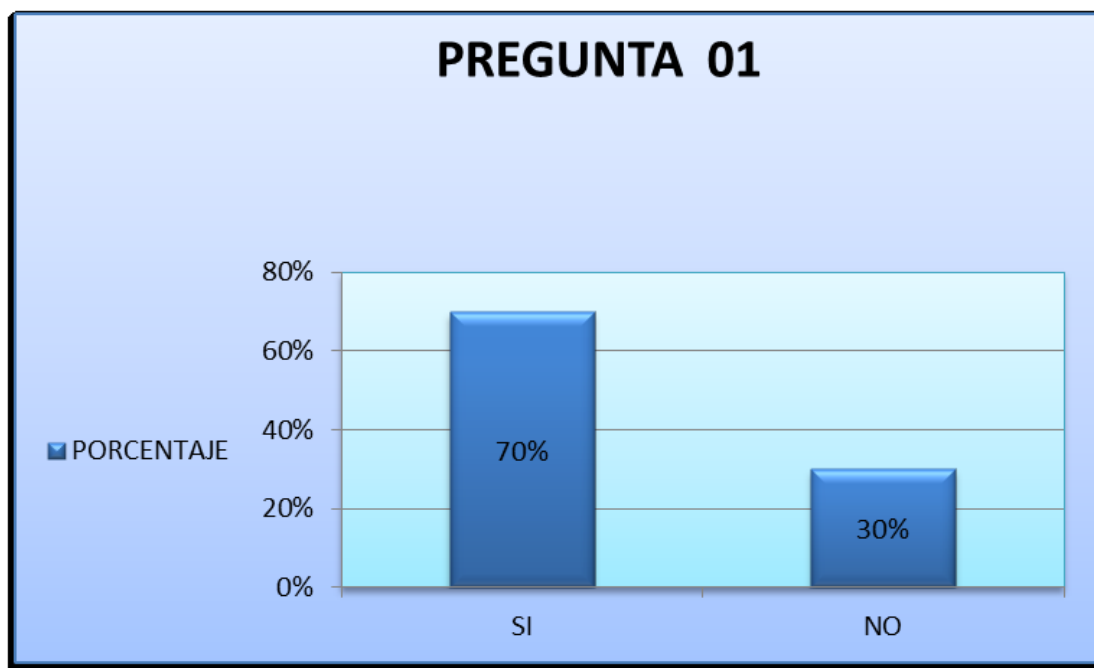
4.5.1. ABOGADOS

Cuadro 1

¿Está Ud. en libre ejercicio de la profesión?

OPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	7	70%
NO	3	30%
TOTAL	10	100%

Gráfico 1



Fuente: Abogados

Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 1

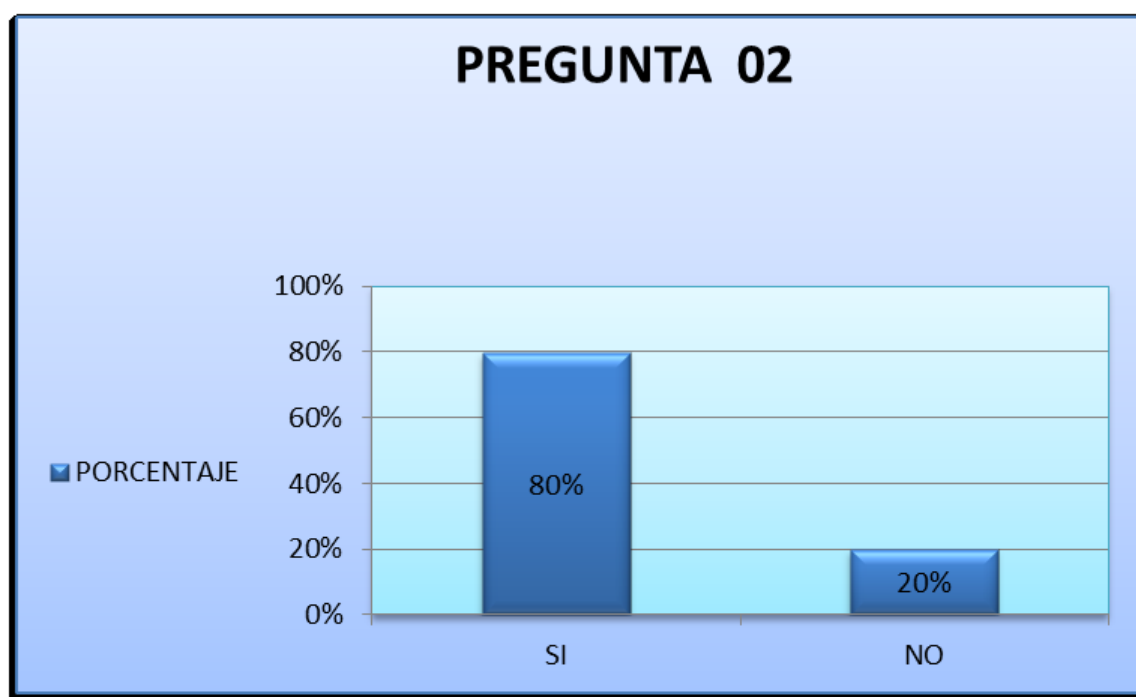
En esta pregunta los Abogados respondieron en un 30% NO, si su actividades de Abogado es el libre ejercicio de la Profesión, y un 70% SI, por lo que es importante hacer referencia que no todos los Abogados tienen en sí mucho conocimiento acerca de la Reserva de la Indagación Previa frente a las normas del debido proceso.

Cuadro 2

¿Es de su conocimiento si la reserva de la indagación previa deja en indefensión a las partes investigadas?

OPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	8	80%
NO	2	20%
TOTAL	10	100%

Gráfico 2



Fuente: Abogados

Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 2

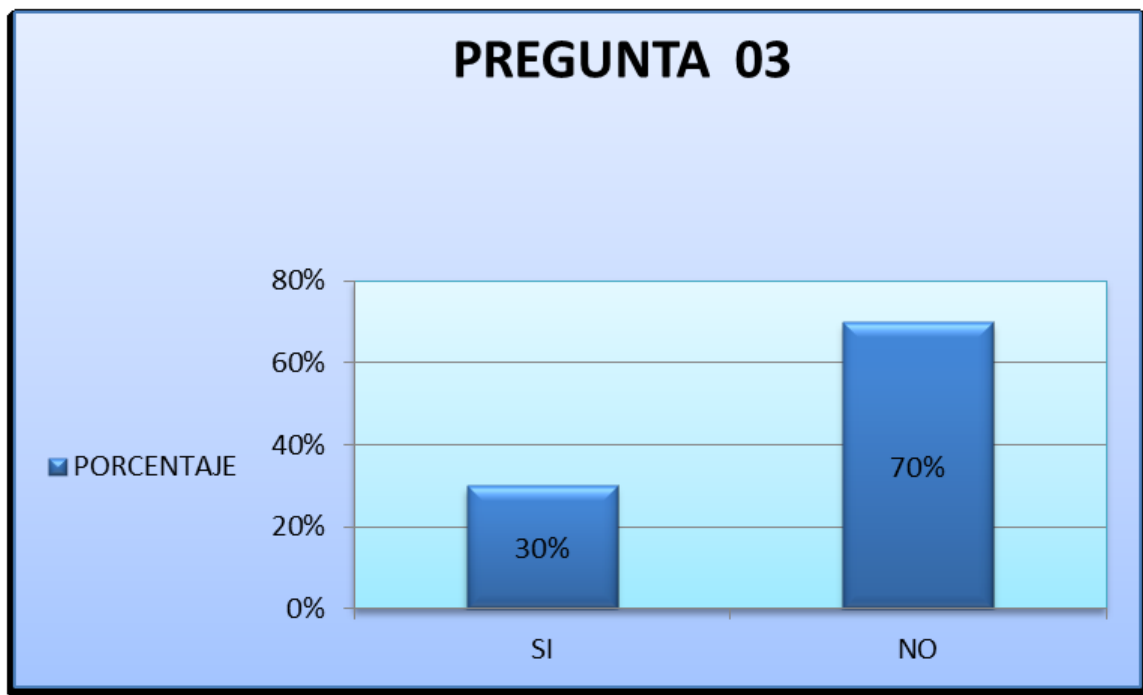
En esta pregunta los Abogados emiten un criterio en un 20% que NO, y un 80% que SI, por lo que es necesario manifestar que dentro de esta fase investigativa de alguna manera los abogados encuestados lo largo de su carrera profesional y defensas palparon de una manera directa como se han violentado las Normas del Debido Proceso por motivo de la Reserva de la Indagación Previa en donde en varios casos se deja en indefensión a las partes, considerando que como abogados defensores son ellos los que tienen el derecho a ejercer su defensa.

Cuadro 3

¿Considera usted que en la indagación previa se les permite tener acceso y sacar copias al expediente a los investigados?

OPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	3	30%
NO	7	70%
TOTAL	10	100%

Gráfico 3



Fuente: Abogados

Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 3

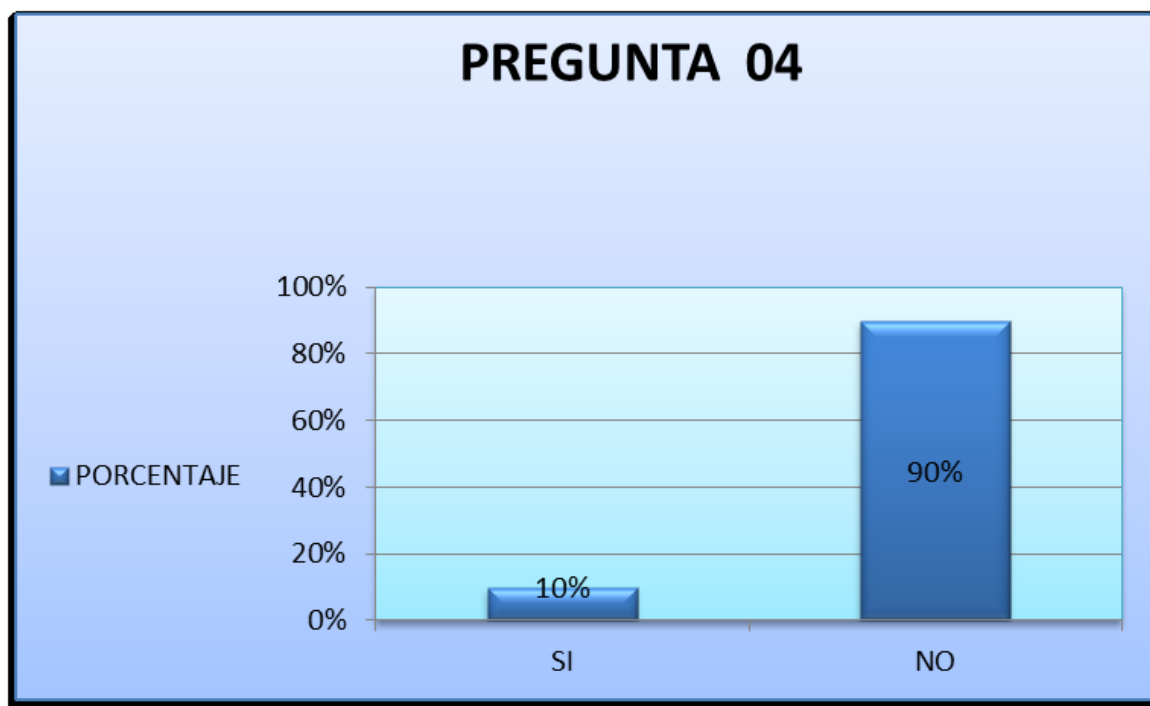
Siguiendo con el estudio de las encuestas los Abogados emiten su criterio en un 70% que NO, y un 30% que SI, por lo que se puede apreciar que una gran parte de los Agentes Fiscales en la etapa pre procesal de la de Indagación Previa no les permiten el acceso total al expediente lo que hace a que puedan no ejercer su defensa y aportar medios de cargos y descargos para comprobar su inocencia impidiéndoles el acceso directo al expediente de la investigación violentando las Normas del Debido Proceso.

Cuadro 4

¿Conoce, si los Agentes Fiscales al momento de iniciar una indagación previa, citan y notifican de conformidad a lo dispuesto en el Art.27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público?

OPCIÓN			FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI			1	10%
NO			9	90%
TOTAL			10	100%

Gráfico 4



Fuente: Abogados

Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 4

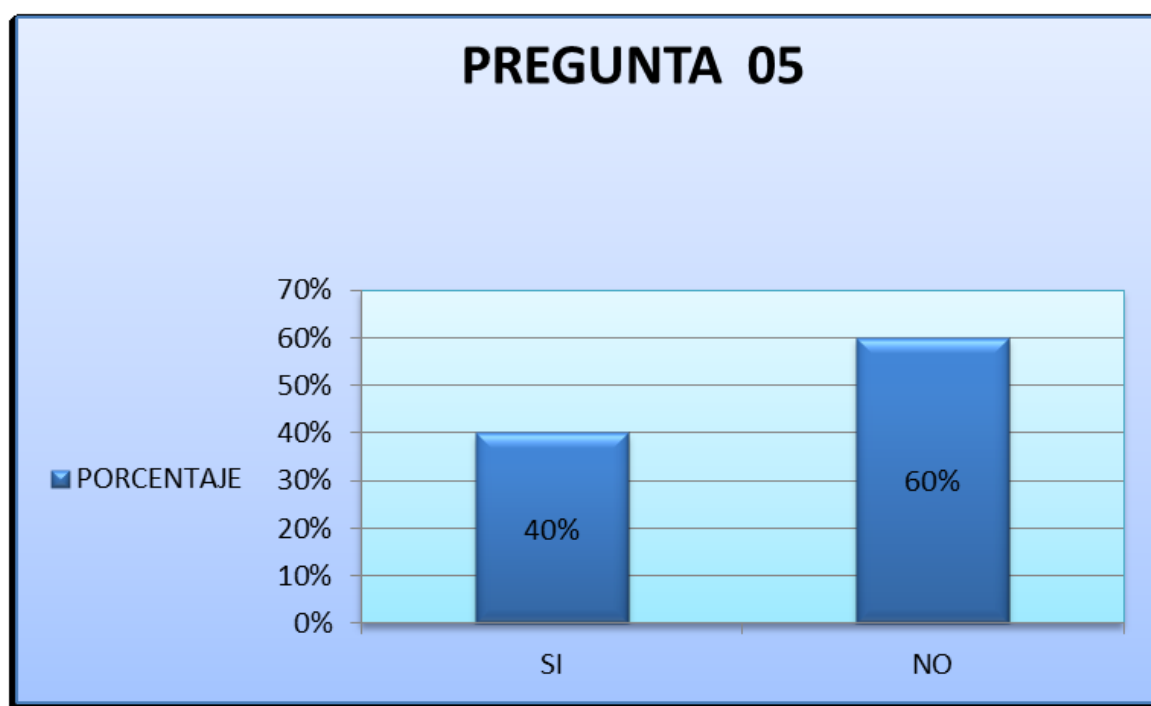
En el resultado de esta pregunta los Abogados encuestados emiten su criterio en un 90% NO y un 10% que SI, por lo que es claro darse cuenta el estado de indefensión que se deja a los sujetos involucrados para que ejerzan el derecho de la defensa, mediante el cual los Agentes Fiscales omiten e inobservan las normas establecidas en ley en cuanto se debería de cumplir con el mandato legal establecido para que se dé una correcta equidad en la justicia, en esta pregunta es importante recalcar que muchos de los fiscales no notifican al sospechoso desde el momento en que se abrió una Indagación previa en su contra sino más bien luego de haber practicado algunas diligencias como es la verificación de información personal del sospechoso.

Cuadro 5

¿Es de su conocimiento, si en la indagación previa se cumple con un debido proceso durante la investigación?

OPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	4	40%
NO	6	60%
TOTAL	10	100%

Gráfico 5



Fuente: Abogados

Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 5

En esta pregunta los Abogados emiten su criterio acerca en un 60% que NO ,y un 40% que SI, por lo es necesario manifestar que están violentando la norma legal dispuesta y no cumpliendo con los la gama de principios constitucionales establecidos para que se lleve a efecto un buen debido proceso y se tenga al fin un buen objetivo que es el perseguir al responsable del delito.

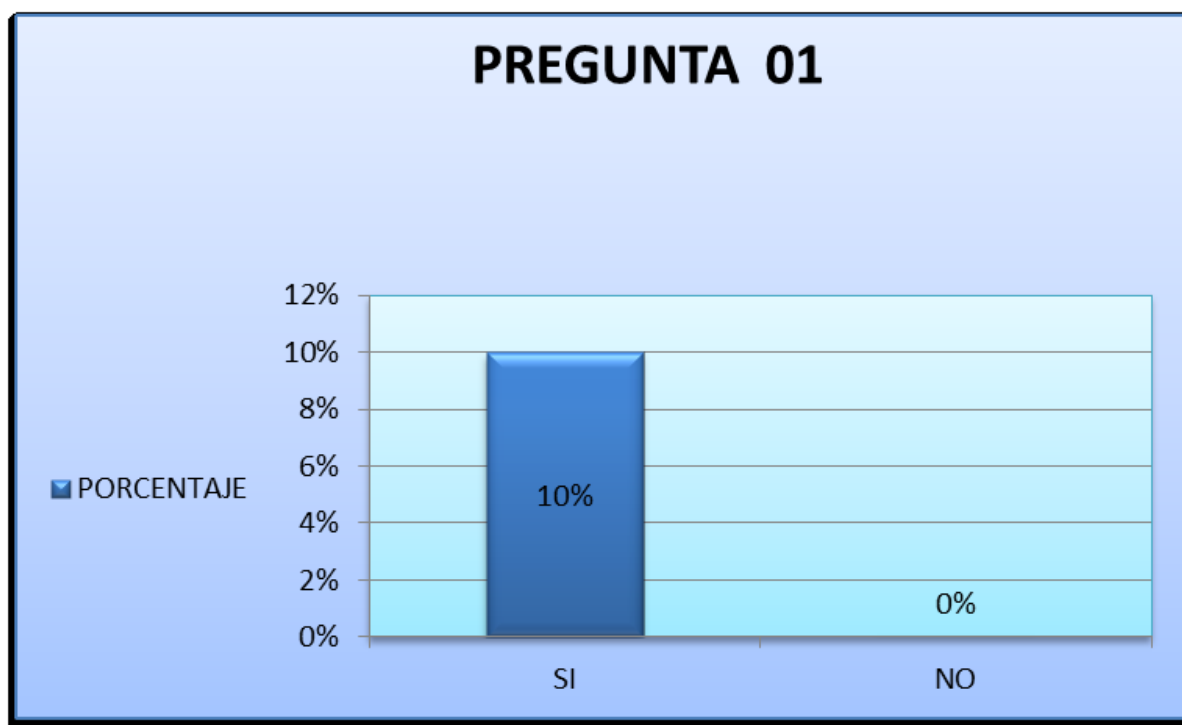
4.5.2. ESTUDIANTES PASANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PICHINCHA

Cuadro 6

¿Está Usted al momento realizando pasantías en el Ministerio
Público de
Pichincha?

OPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	10	100%
NO	0	00%
TOTAL	10	100%

Gráfico 6



Fuente: Estudiantes Pasantes Ministerio Público Pichincha

Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 7

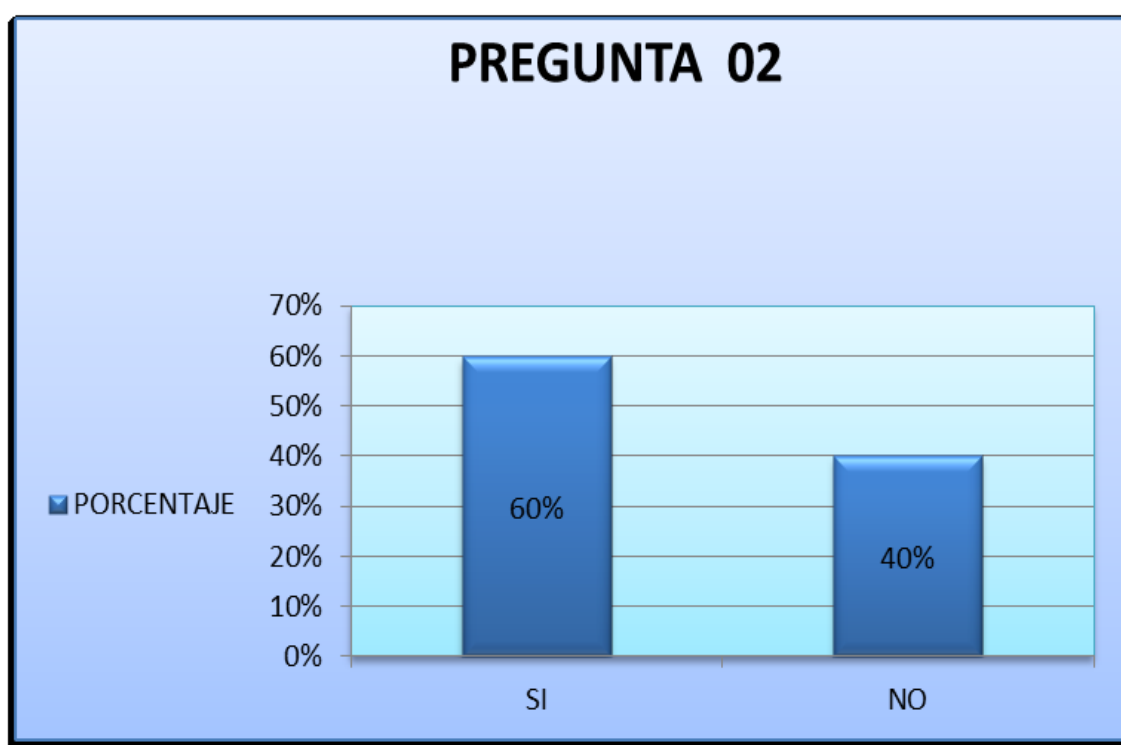
En esta pregunta los estudiantes Pasantes encuestados respondieron en un 100% que SI, lo cual nos ayuda a determinar que son personas que tienen conocimiento sobre el tema de la Reserva de la Indagación previa, permitiéndonos tomar criterios con conocimientos en la materia para el desarrollo de la presente encuesta.

Cuadro 7

¿Es de su conocimiento si la reserva de la indagación previa deja en indefensión a las partes investigadas?

OPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	6	60%
NO	4	40%
TOTAL	10	100%

Gráfico 7



Fuente: Estudiantes

Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 8

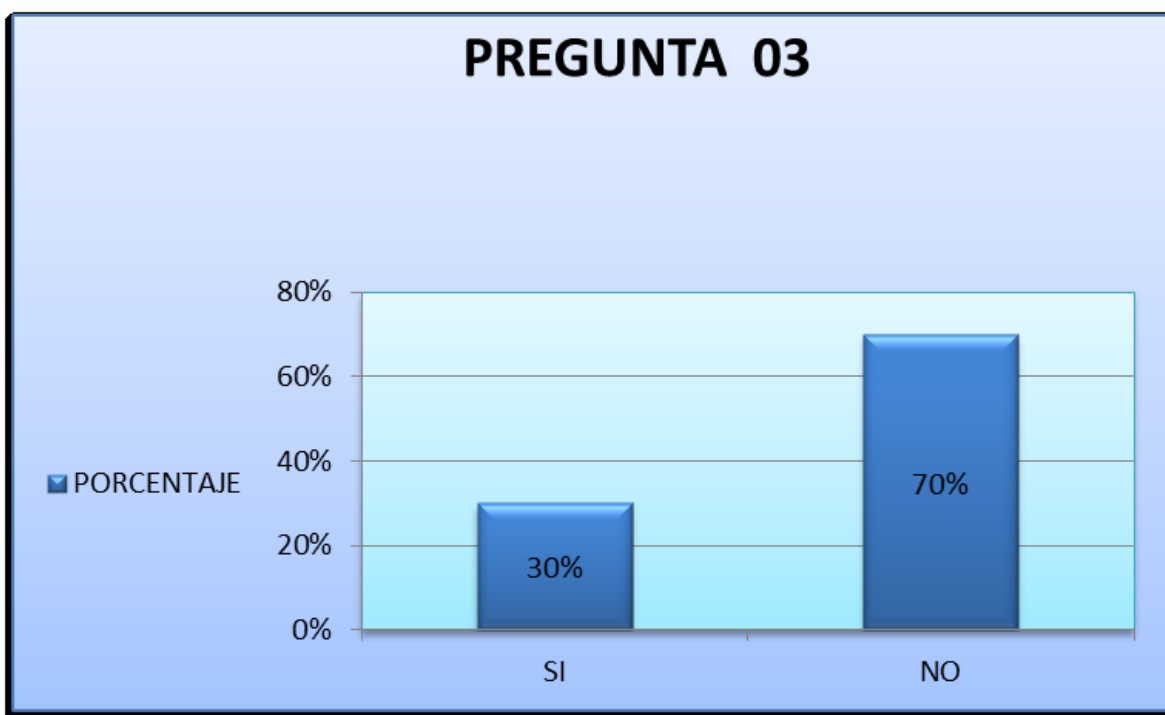
En esta pregunta los Abogados emiten un criterio en un 20% que NO, y un 80% que SI, por lo que es necesario manifestar que dentro de esta fase investigativa se deja en indefensión a las partes, sin considerar que son ellos los que tienen el derecho a ejercer su defensa.

Cuadro 8

¿Considera usted que en la indagación previa se les permite sacar copias y tener acceso al expediente a los investigados?

OPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	3	30%
NO	7	70%
TOTAL	10	100%

Gráfico 8



Fuente: Estudiantes

Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 9

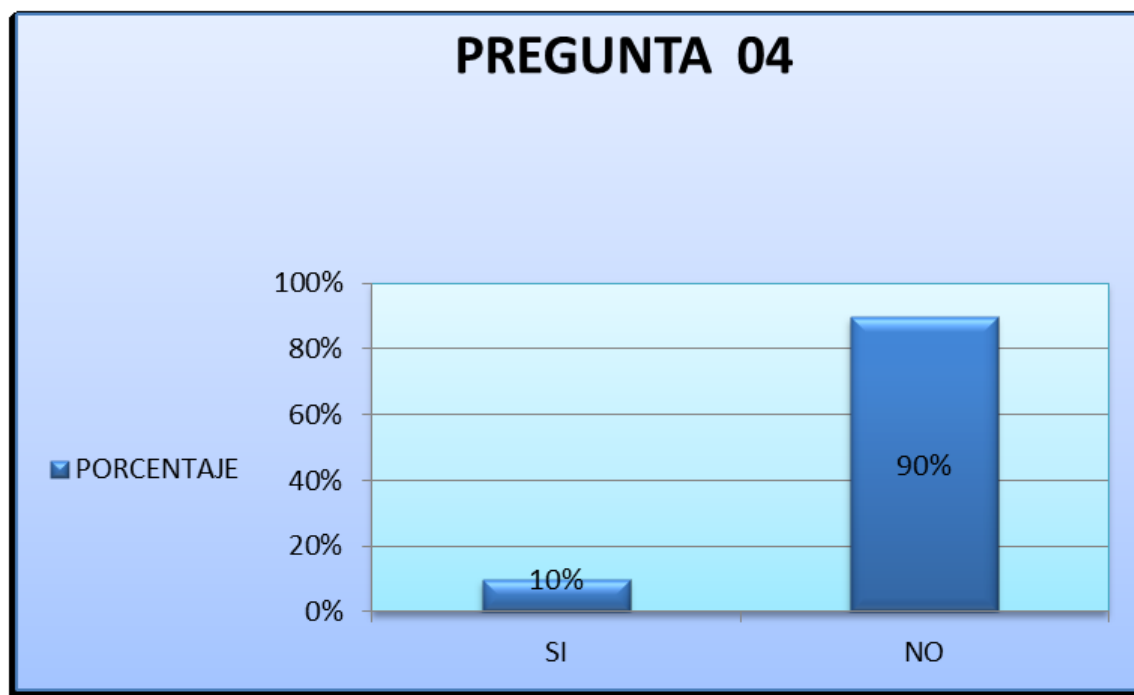
Siguiendo con el estudio de las encuestas los Abogados emiten su criterio en un 70% que NO, y un 30% que SI, los Agentes Fiscales en la etapa de investigación no les permiten a que puedan ejercer su defensa y aportar medios de cargos y descargos para comprobar su inocencia impidiéndoles el acceso directo al expediente de la investigación.

Cuadro 9

¿Conoce, si los Agentes Fiscales al momento de iniciar una indagación previa, citan y notifican de conformidad a lo dispuesto en el Art.27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público?

OPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	1	10%
NO	9	90%
TOTAL	10	100%

Gráfico 9



Fuente: Estudiantes

Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 10

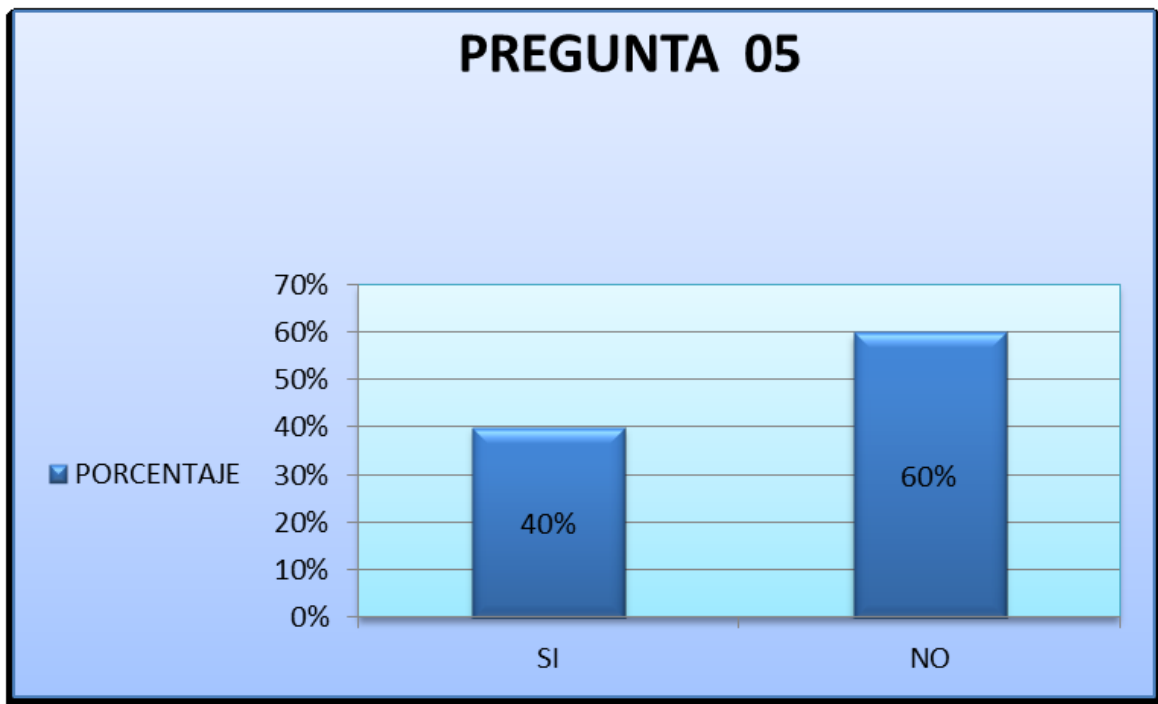
En el resultado de esta pregunta que los Abogados emiten su criterio acerca en un 90% NO y un 10% que SI, por lo que es claro darse cuenta el estado de indefensión que se deja a los sujetos involucrados para que ejerzan el derecho de la defensa, mediante el cual los Agentes Fiscales omiten e inobservan las normas establecidas en ley en cuanto se debería de cumplir con el mandato legal establecido para que se dé una correcta.

Cuadro 10

¿Es de su conocimiento, si en la indagación previa se cumple con un debido proceso durante la investigación?

OPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	4	40%
NO	6	60%
TOTAL	10	100%

Gráfico 10



Fuente: Estudiantes

Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 11

En esta pregunta los Abogados emiten su criterio acerca en un 60% que NO ,y un 40% que SI, por lo es necesario manifestar que están violentando la norma legal dispuesta y no cumpliendo con los la gama de principios constitucionales establecidos para que se lleve a efecto un buen debido proceso y se tenga al fin un buen objetivo que es el perseguir al responsable del delito.

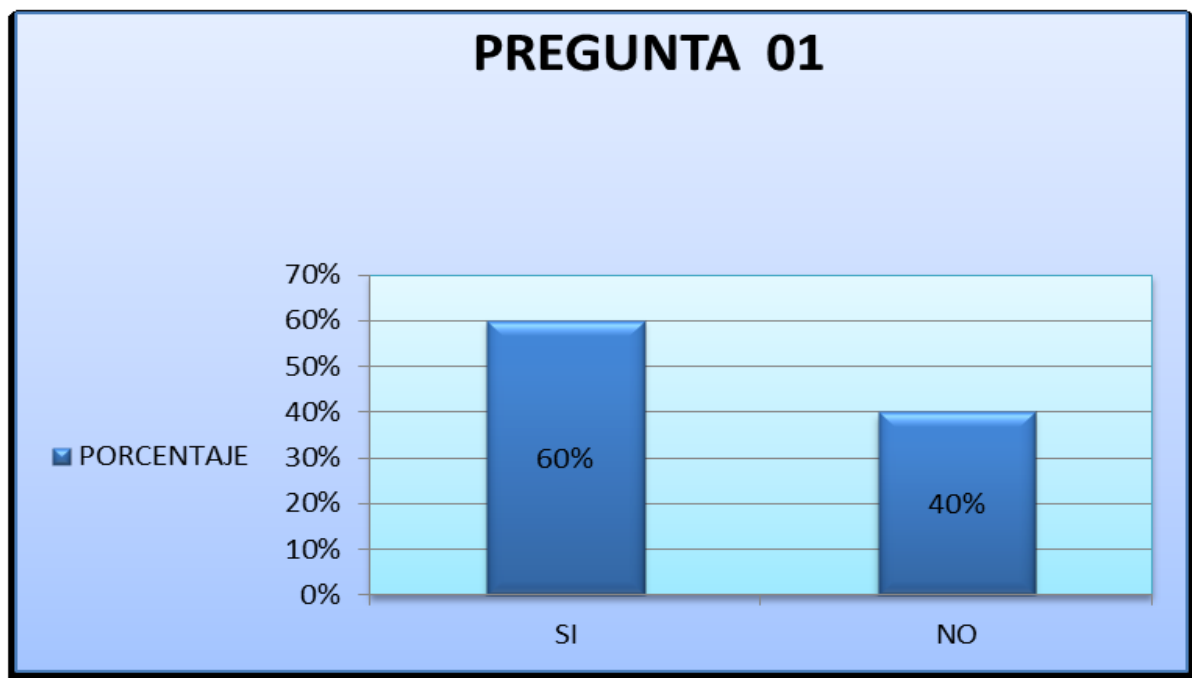
4.5.3. AGENTES FISCALES

Cuadro 11

¿Considera usted que en el Ministerio Público en la Provincia de Pichincha se están aplicando correctamente las Indagaciones Previas conforme a las normas del Debido Proceso contempladas en la Constitución del Estado en concordancia con el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público?

OPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	3	60%
NO	2	40%
TOTAL	5	100%

Gráfico 11



Fuente: Agentes Fiscales y Función Judicial de Pichincha

Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 12

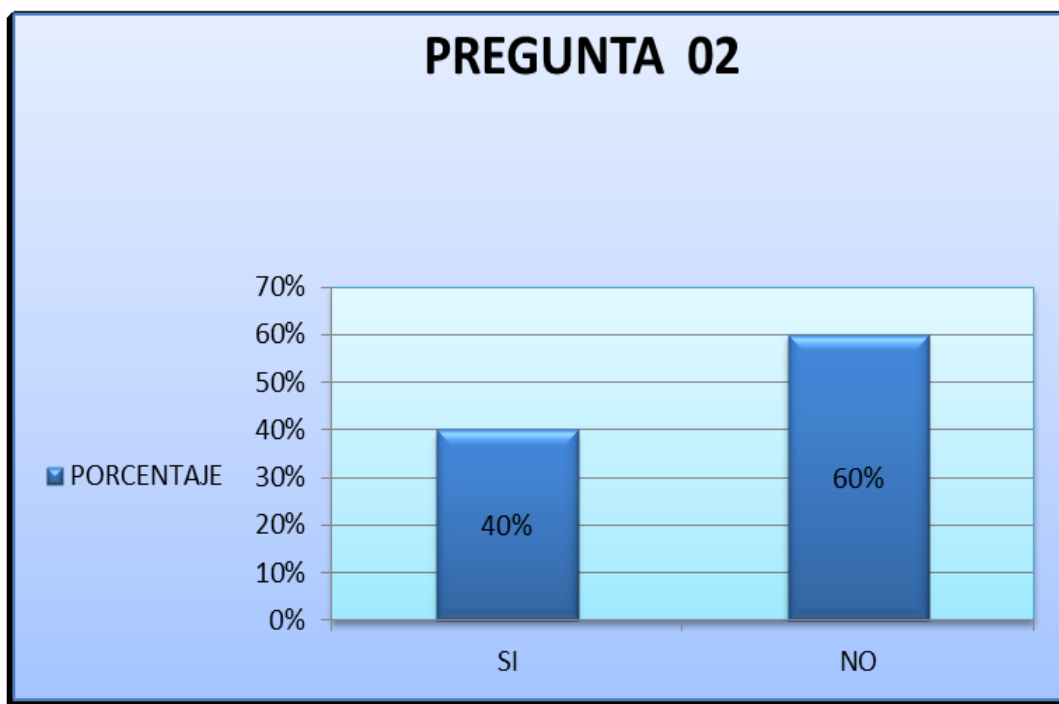
En esta parte de la encuesta los Fiscales emiten su criterio acerca de un 40% NO, en vista de que aún a sabiendas de lo que se encuentra escrito en la ley todavía hay Fiscales que cierta información no debe ser notificada al sospechoso por considerar que entorpecería la Investigación mantenimiento erróneamente el concepto de la reserva violentando el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público mientras que en un 60% contestaron que SI, consideran conveniente lo preceptuado en la ley, en cuanto a la reserva pero considerando que si es necesario que hay cierta información no debe ser proporcionada hasta la última fase del proceso lo que a pesar de manifestar que no se violenta las garantías del Debido Proceso consideran de que en ciertos momentos si se evita cierta información al sospechoso dentro de la Indagación Previa.

Cuadro 12

¿Conoce Ud., si los agentes Fiscales citan y notifican a las partes procesales, una vez que se ha dado inicio a la Indagación Previa según lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público?

Gráfico 12

OPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	2	40%
NO	3	60%
TOTAL	5	100%



Fuente: Agentes Fiscales

Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 13

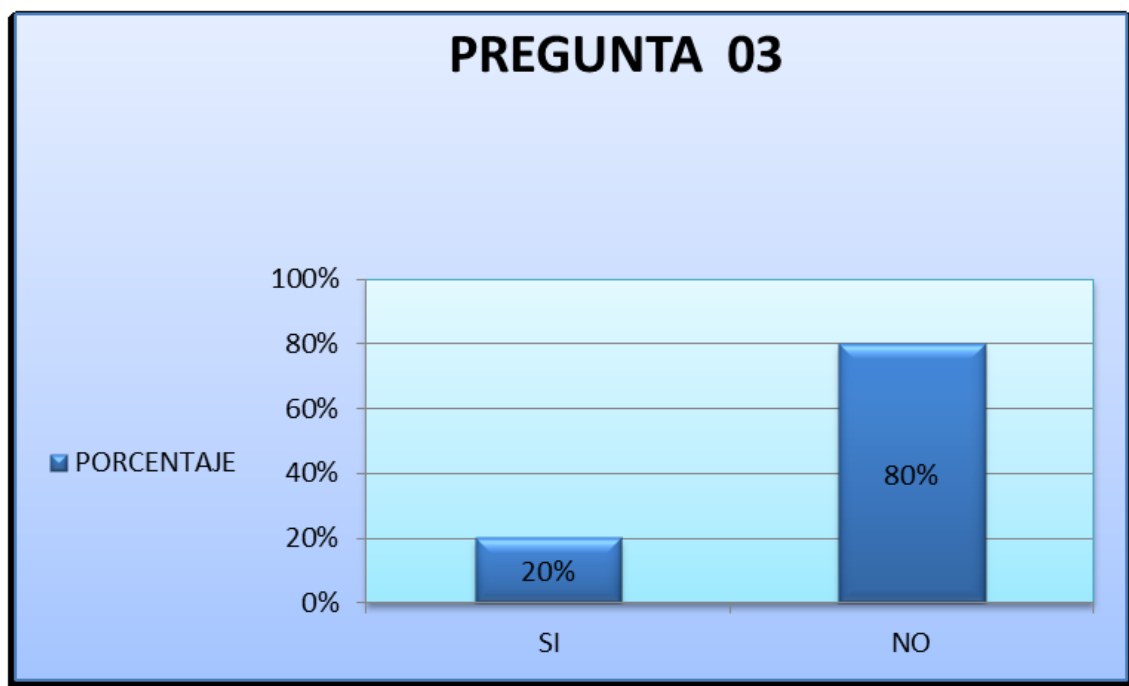
En esta pregunta de la encuesta, los señores Fiscales dan su criterio acerca en un 40% que SI, permitiendo su total defensa por parte del sospechoso durante la Indagación Previa y un 60% NO, ya que la notificación que se le realiza al sospechoso en muchos de los casos se lo realiza en el momento que se lo llama a rendir su versión siendo esto una vez que ya se han practicado algunas diligencias en contra del sospechoso y de las cuales nunca fue notificado de lo que se va a actuar y por lo que escudriñar sobre su información personal hasta en lo que se refiere a información telefónica personal, lo que se considera que se deja en indefensa al investigado violentando las normas del debido proceso .

Cuadro 13

¿La reserva del Agente Fiscal en la Indagación Previa deja en la indefensión a las partes procesales?

OPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	1	20%
NO	4	80%
TOTAL	5	100%

Gráfico 13



Fuente: Agentes Fiscales

Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 14

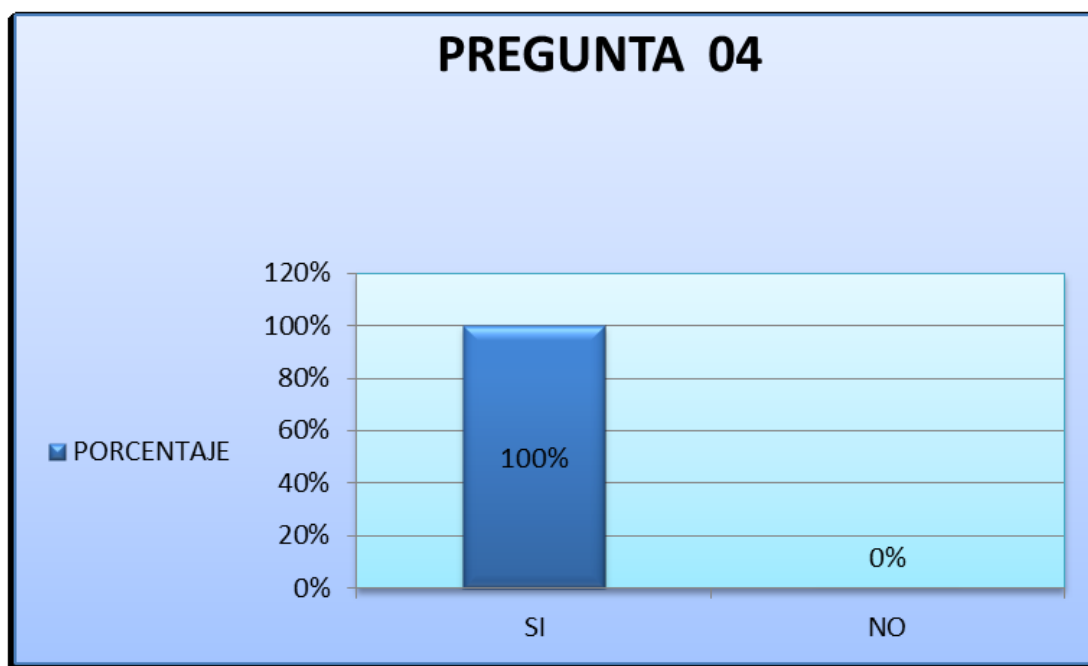
En esta parte de la encuesta los señores Fiscales emiten su criterio acerca en un 20% NO, y un 60% SI, considerándose que este 20% que considera que si se deja en indefensión en la Indagación Previa se sustentan que en muchas ocasiones se incurre en este error por motivo de no entorpecer la investigación y no adelantar a los hechos investigados al sospechoso.

Cuadro 14

¿Considera Ud., que si se inicia una Indagación Previa debería cumplirse con lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución del Estado y el Art 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público?

OPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	5	100%
NO	0	0%
TOTAL	5	100%

Gráfico 14



Fuente: Agentes Fiscales

Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 15

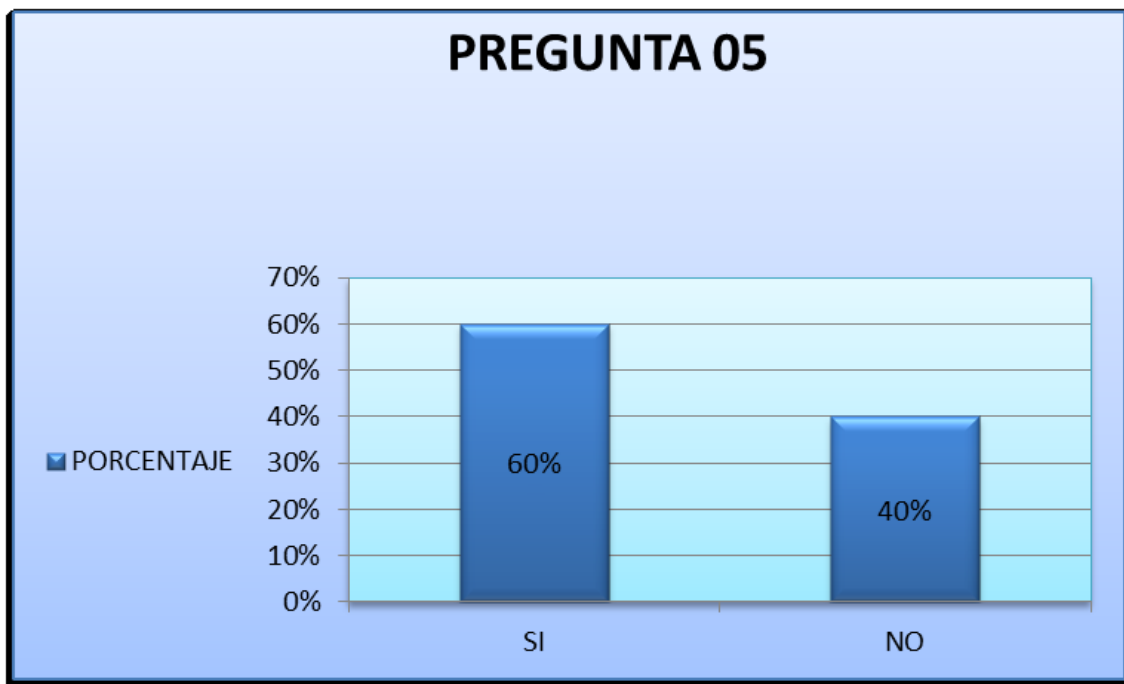
En esta parte de la encuesta los Agentes Fiscales emiten su criterio en un 100% que SI, conocen lo que dispone el Art. 76 de la Constitución en cuanto a las Normas de Debido Proceso y 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Cuadro 15

¿Cree usted que hay una contraposición de normas entre el art. 215 del código de procedimiento penal y el art. 27 de la ley orgánica del ministerio público?

OPCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	3	60%
NO	2	40%
TOTAL	5	100%

Gráfico 15



Fuente: Agentes Fiscales

Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 16

En esta parte de la encuesta los señores Fiscales consideran en un porcentaje del 40% que NO, y un 60%, que SI, por lo que importante resaltar que dada a la experiencia de ellos en estas norma legales si existe un vacío jurídico por lo que hay que hacer una reforma a fin de aclarar el alcance de la reserva con la finalidad de evitar la violación a las Normas de Debido Proceso.

4.6. POBLACIÓN: MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES PENALES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

4.6.1. MUESTRA No.1

La presente entrevista se las realiza a los señores Miembros del **Tribunal 2do.** De Garantías Penales de Pichincha, con la finalidad de constatar si se está sustanciando correctamente la reserva de la indagación previa frente a las normas del debido proceso en el Ministerio Público en la Provincia de Pichincha, los mismos que respondieron lo siguiente:

A la pregunta No. 1

¿Cree usted conveniente que en el Ministerio Público en la Provincia de Pichincha se están sustanciando la reserva de la Indagaciones Previas conforme a las normas del Debido Proceso contempladas en la Constitución del Estado en concordancia con el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público?

Respondiendo que en ciertos casos de investigación si se aplica lo que expresa la Ley, pero en muchos casos no debido a que según sus experiencias se deja en indefensión en muchos casos debido a que no se les permite tener acceso al expediente.

A la pregunta No 2.

¿Conoce usted, si los Agentes Fiscales citan y notifican según lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público?

Respondiendo que en ciertos casos no se cumple con el mandato legal debido que no se cita ni se notifica a los investigados.

En la pregunta No. 3

¿La reserva del Agente Fiscal en la Indagación Previa deja en indefensión a las partes?

Responde, no se aplica de acuerdo con la ley, dejándose en indefensión, por lo que más correcto sería que deberían de iniciar una indagación con una citación o notificación a los investigados para que ejerzan el derecho de la defensa.

A la pregunta No.4

¿Considera usted, que si se inicia una indagación previa debería cumplirse con lo dispuesto en el Art. 76 de la Constitución del Estado?

Responde, esa es la norma principal para todo inicio de investigación ya que en esta disposición legal encontramos a l los principios jurídicos de todo ser humano en cuanto al desarrollo de un debido y oportuno proceso.

En lo referente a la pregunta No.5 ¿Cree usted, que hay una contraposición de norma entre el Art. 215 del Código de Procedimiento Penal y el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio?

Respondiendo, en verdad si hay una contraposición de norma pero lo más importante es aplicar la norma principal al momento de iniciar unan investigación.

4.7. POBLACIÓN: MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES PENALES DE PICHINCHA

4.7.1. MUESTRA No. 2

La presente entrevista se la realiza a los señores Miembros del **Tribunal 4to.** De Garantías Penales de Pichincha, con la finalidad de constatar si se está sustanciando correctamente la reserva de la indagación previa frente a las normas del debido proceso en el Ministerio Público en la Provincia de Pichincha los mismos que respondieron lo siguiente:

A la pregunta No. 1

¿ Cree usted conveniente que en el Ministerio Público en la Provincia de Pichincha se están sustanciando la reserva de la Indagaciones Previas conforme a las normas del Debido Proceso contempladas en la Constitución Política del Estado en concordancia con el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público?.

Respondiendo, considero que en algunos casos todavía los señores Agentes Fiscales incurrir en ciertas inobservancias en cuanto a la Reserva de la Indagación Previa en donde han tratado de ocultar cierta información a los sospechosos lo cual en ciertos momentos ha ocasionado que la defensa interponga hasta recursos de anulación por inobservancia a las Normas del Debido Procesos.

Pregunta No 2.

¿Conoce usted, si los Agentes Fiscales citan y notifican según lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público?

Respondiendo, Creo que si cumplen con la notificación y citación solo que muchos Fiscales muchas veces lo realizan luego de que ya se han practicado algunas diligencias en contra de los sospechosos lo cual en muchas ocasiones no se les permite ejercer su defensa oportunamente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

En la pregunta No. 3

¿La reserva del Agente Fiscal en la Indagación Previa deja en indefensión a las partes?.

Responde a mi manera de ver la ley no hay por qué dejar en indefensión a los sujetos investigados, pero si se da en muchos casos por lo que sí existe omisión en esta parte de la investigación.

A la pregunta No.4

¿Considera usted, que si se inicia una indagación previa debería cumplirse con lo dispuesto en el Art. 76 de la Constitución del Estado?

Responde, es lo lógico por lo que así se cumpliría con las normas legales y con un excelente debido proceso y en su momento oportuno todas las actuaciones que se han efectuados serían válidas.

Pregunta No.5

¿Cree usted, que hay una contraposición de norma entre el Art.215 del Código de Procedimiento Penal y el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio?

Respondiendo, en los actuales momentos están estas dos normas pero en realidad muchos colegas omiten el contenido de lo que expresa estas leyes ya que debería de tenerse bien en cuenta para ejercer una buena defensa técnica sea del sospecho o del ofendido.

4.8. POBLACIÓN: MIEMBROS DEL TRIBUNAL 5to. DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA

4.8.1. MUESTRA No. 3

La presente entrevista se las realiza a los señores Miembros del **Tribunal 5to.** De Garantías Penales de Pichincha tribunales Penales de Pichincha, con la finalidad de constatar si se está sustanciando correctamente la reserva de la indagación previa frente a las normas del debido proceso en el Ministerio Público en la Provincia de Pichincha, los mismos que respondieron lo siguiente:

A la pregunta No. 1

¿ Cree usted conveniente que en el Ministerio Público en la Provincia de Pichincha se están sustanciando la reserva de la Indagaciones Previas conforme a las normas del Debido Proceso contempladas en la Constitución Política del Estado en concordancia con el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público?

Respondiendo, en la Provincia de Pichincha los señores Agentes Fiscales en su gran mayoría si aplican lo que estipula la normas legales es decir la Constitución de la República del Ecuador la Ley Orgánica del Ministerio Público, por cuanto yo considero que si se cumple con todas las normas del debido proceso, recalando que ciertos Agentes Fiscales son muy herméticos en cuanto a la información con las partes procesales lo que les hace inobservar las garantías del debido proceso.

Pregunta No 2.

¿Conoce usted, si los Agentes Fiscales citan y notifican según lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público?

Respondiendo, esta disposición legal no se da cumplimiento y se la omite tanto por parte del abogado defensor como del Fiscal que lleva la investigación, por lo que se deja en indefensión a los investigados.

En la pregunta No. 3

¿La reserva del Agente Fiscal en la Indagación Previa deja en indefensión a las partes?

Responde, si se notifica y se cita no hay indefensión, si se les permite el acceso al expediente no hay indefensión, pero si se les prohíbe el acceso ahí los dejan en indefensión, lo que si sucede en muchos caso en donde a veces no se les permite el acceso ni en lo más principal que es el Parte Policial dejando en indefensión a las partes procesales.

A la pregunta No.4

¿Considera usted, que si se inicia una indagación previa debería cumplirse con lo dispuesto en el Art. 76 de la Constitución Política del Estado?

Responde, Si eso sería lo lógico en cuanto debe de observarse el debido proceso en todas investigaciones y tener acceso a que pueda ejercer el derecho de la defensa.

En la pregunta No.5

¿Cree usted, que hay una contraposición de norma entre el Art. 215 del Código de Procedimiento Penal y el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio?

Respondiendo, no es que hay contraposición de normas sino más bien no hay una buena aplicación de la ley en cuanto a la sustanciación de la indagaciones previas por partes de los señores fiscales.

4.9. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

En la proyección del trabajo, se ciñeron los objetivos de la investigación científica, en lo que respecta a la indagación previa frente a las normas del debido proceso lo que genera un análisis jurídico muy importante el cual lo lleva al ámbito social para que de una correcta investigación debido a que en el Ministerio Público está dejando en indefensión a los sujetos investigados por lo que surge orientar con el estudio de la presente investigación un Proyecto de tipificación a la tal mencionada reserva de la indagación previa tal como se le demuestra en el presente trabajo investigativo. Por lo que de acuerdo a nuestro criterio la reserva de la indagación previa frente a las normas del debido proceso nos demuestran su desconocimiento en cuanto al derecho de la defensa y oportunidad que deben de tener los sujetos investigados, lo cual con la aportación de la investigación de todos los intervinientes ayudarían a que el hecho que se oculta llegue la claridad de la sociedad. En lo que respecta a la indagación previa podremos decir que existen Agentes Fiscales que no permiten que los investigados tengan acceso al expediente ya que ellos creen que se les vulneraría la información que existe en ese momento, lo que contradice a los que dispone la propia Ley es decir ellos son los que pueden tener acceso directo a la información que existe en el expediente ya que no son ni prensa ni terceras persona a los que la ley si les prohíbe su acceso informativo ya que se puede escapar información confidencial de parte de los investigadores. La indagación previa es una actividad eventual en donde el Ministerio Público realiza investigaciones tendiente a esclarecer el delito cometido, en esta fase de investigación se debe respetar las normas Constitucionales

establecidas en cada uno de los principios jurídicos existente en el estado de derecho, por lo que el aporte de estos resultado sería de mucha importancia para el Ministerio Público ya que existe la necesidad urgente de reformar el Art. 215 del Código de Procedimiento Penal el cual debe de tener mucha armonía a lo que dispone el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

4.10. CONSTATACIÓN DE HIPÓTESIS

La constatación de la Hipótesis implica la confrontación de las conjeturas hipotéticas con el resultado del proceso de investigación y luego de obtener los resultados jurídicos y fácticos de la investigación se concluye que: Lo que refiere la conducta de los señores Agentes Fiscales, en cuanto a la indagación previa frente a las normas del debido proceso, se torna de una manera ilegal en cuanto a la sustanciación de la investigación es decir que toman aptitudes distintas a las establecidas en la propia ley penal ecuatoriana, sin medir el perjuicio del estado de indefensión que se quedan los investigados por la no aplicación correcta de la indagación previa conforme lo establece el debido proceso. A pesar de que el presente trabajo de investigación es de suma importancia, es decir que esta Tesis en su fundamento jurídico quiere reformar el estado de investigación de la indagación previa en cuanto al acceso que pueden tener las partes al expediente se ha podido evidenciar que no se cumple con el mandato establecido por la ley ya que se niega el derecho en muchos casos a la defensa y perjudica a los investigados a que sean partes de la presente investigación no cumpliendo las normas del debido proceso. En cuanto a las hipótesis específicas del proyecto de Tesis en lo que respecta a la sustanciación de la indagación previa bajo la reserva del fiscal implica la aplicación equitativa de la ley, y la actuación del fiscal en la indagación previa garantiza el derecho constitucional de la defensa de las partes procesales, lo que refiere a que se consolida el marco jurídico que necesita hoy con claridad la reforma urgente la correcta sustanciación de la indagación previa conforme a las normas del debido proceso, lo que demuestra una inaplicabilidad del debido proceso en esta fase investigativa, por lo que se verifica el estado de indefensión a los sujetos investigados, lo que hace un acto irreprochable ante la justicia ecuatoriana quedando mal ante los ojos de la Declaración de los Derechos Humanos que también garantiza el derecho a la defensa y que se sustancie una correcta indagación previa conforme a un excelente

procedimiento, Por lo anteriormente manifestado hemos llegado a comprobar las Hipótesis General y Específicas, las mismas que ha dejado constancia que existe una clara constatación con los objetivos de la referida reforma del proyecto de una correcta sustanciación de la indagación previa frente a las normas del debido proceso.

4.11. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Básicamente cuando se identifica un problema se diseña un proyecto en donde juega un papel importante la planificación, la misma que significativamente forma parte de la fase ejecutiva que es la realización de la investigación, poniendo en práctica las prescripciones estipuladas en el diseño, siendo el gran objetivo, de procesar los resultados para culminar la fase pos ejecutiva, es por ello que resulta la finalidad nuestra como autores y responsables del presente trabajo de investigación de cumplir a cabalidad con el diseño trazado y de esta forma presentar nuestro propósito o solución al problema planteado, paraqué sea acogido dándole el tratamiento de respuestas favorables que benefician a una sociedad que es la única víctima de los conflictos sociales. Con mucha claridad podemos manifestar que los Miembros de los Tribunales Penales de Pichincha, Jueces Penales, Fiscales y Abogados en el libre ejercicio, han sido directos en sus referencias jurídicas en lo que respecta a nuestro estudio, respecto a si se está cumpliendo con lo que dispone el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en concordancia con el Art. 76 del Estatuto del Estado es decir con el debido proceso, siendo conocedores y objetivos al momento de dar su opinión , los mismos que con larga trayectoria y experiencia consideran que, para que se dé una correcta sustanciación de la indagación previa frente a las normas del debido proceso es necesario conocer el derecho y ejercerlo para poder ejercer la defensa de sus clientes y así cumplir con el mandato expreso de una justicia sin distinción de ninguna clase social considerando que prevalece el debido proceso ya que se debe precautelar la seguridad jurídica. Por lo que es necesario establecer que el Código de Procedimiento Penal tipifica que la indagación previa es reservada pero no para los sujetos investigados es decir que la norma Suprema del Estado también lo manifiesta de igual forma, así como la Ley Orgánica del Ministerio Público Establecen sus comparaciones por lo que es necesario establecer lo que manifiesta las normas procesales en cuanto a que se debe de hacer valer este principio

Constitucional respecto a los que intervienen en la investigación es decir que la reserva que se mantiene expresa en la ley es para los que no son sujetos investigados por cuanto es claro dentro de la trayectoria del estudio que esa indefensión hay que abolirla y dejarla bien expresa en cuanto a su aplicabilidad, ya que no se pueden quedar sin una defensa veraz y oportuna conforme los principios jurídicos de toda ser humano, es necesario manifestar que siendo la indagación previa una etapa de investigación hay que notificar a los investigados para que ejerzan el derecho a su defensa y que las actuaciones emanadas en esta fase de investigación sirvan en su momento oportuno, por lo que al constituirse este en un problema jurídico es nuestra preocupación darle mucha importancia a nuestra propuesta, la misma que se justifica con la reforma de las normas que en la actualidad se encuentran vigentes en relación a los principios constitucionales de todo ser humano.

4.12. ESTUDIO DE CASOS (CASUÍSTICA)

Es importante manifestar que la sociedad espera de la Justicia, por lo que manifestamos con certeza la existencia de indefensión que se dejan a los sujetos investigados dentro de una indagación previa, a los mismos que no les permiten aportar medios de descargos que les ayude a esclarecer el delito que se le imputa, por lo que cuando son investigados y ellos intervienen dentro de la investigación autorizando a sus defensores que tienen toda la facultad para buscar los medios de esclarecimiento del delito los Señores Agentes Fiscales no les dan acceso a ese derecho Constitucional debido a que por encontrarse en indagación previa no les notifican las providencias, por lo que ellos presentan escritos en donde solicitan que se les despachen los medios de descargo y no lo hacen, debido a que es en esta instancia precisamente que se deja en indefensión a los investigados y se le niega el derecho a la defensa el cual es un principio constitucional de todo sujeto investigado. Para mayor explicitud del tema es necesario exponer con claridad del caso que dentro de la indagación previa **No.-40-05-11** de la Brigada de delitos Contra las Personas, el Abogado defensor del investigado ha presentado varios escritos en donde solicitan que se realice el reconocimiento de lugar de los hechos y se recepten la versiones de tres personas, es decir que con fechas diferentes dentro del expediente de indagación previa se pudo observar que hay varios escritos en fechas diferentes y donde consta también la fe de presentación del secretario que recibió el escrito.

Por todo lo expuesto en líneas anteriores solo nos que manifestar que se está incumpliendo lo preceptuado en la Constitución del Estado, en concordancia con el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, es decir que se está dejando en indefensión a los investigados dentro de la indagación previa sin permitirles el derecho a que se defiendan y aporten los elementos de cargos o de descargos que sirvieran para su defensa. Ante todas estas consideraciones es claro manifestar que se está inobservando la Ley al momento de su aplicabilidad, sin considerar todos y cada uno de los principios jurídicos contemplados en la Carta Magna, por lo que es meritorio hacer una modificación a la sustanciación de la indagación previa en donde participe activamente los sujetos investigados.

CONCLUSIONES

En el vigente Código de Procedimiento Penal inspirado en el modelo acusatorio oral de plena aplicación, existe una denominada fase pre procesal que es la indagación previa prevista en el artículo 215, que establece la reserva de dicha indagación. En la práctica y en ciertos casos, esto ha devenido en un abuso de la fiscalía y de la policía judicial encargadas de la indagación, dejándose en indefensión a las partes procesales y violentando las normas del Debido Proceso estipuladas en la Constitución del Ecuador.

Lo que se encuentra determinado en la Ley, es un mandato imperativo para los sujetos intervinientes en la investigación por lo tanto hay que regirse a la norma sancionadora existente.

La indagación previa se encuentra dentro del marco jurídico como medio de una investigación pre-procesal de tipo penal, por lo que no podría aplicarse una correcta indagación previa si no se observa el debido proceso aplicando cada uno de los principios constitucionales establecido para el buen desarrollo de la investigación.

La indagación previa no se ajusta la correcta sustanciación por parte de los señores Fiscales y por lo tanto constituye una indefensión a los investigados sin que les den la oportunidad de acceder a la defensa y un buen debido proceso.

Los Miembros de los Tribunales Penales, Jueces Penales, Agentes Fiscales, y Abogados en el libre ejercicio de la Profesión, coinciden que el Art. 215 inciso ultimo del referente artículo necesita de suma urgencia una reforma Constitucional debido que hay una contraposición a lo que refiere el Art. 27 dela Ley Orgánica del Ministerio Público en cuanto a su aplicación jurídica.

La Asamblea Nacional debe dictar una reforma que llegue a armonizar la correcta sustanciación de la Indagación Previa frente a las normas del debido proceso, para que así se cumpla con un efectivo desarrollo del debido proceso proporcionando uno de los principios básicos del Debido Proceso como es el derecho a la defensa de las partes procesales.

Por lo que una vez realizada la investigación, se puede observar que la solución frente al conflicto de normas de investigación no es el que se encuentra en la actualidad en el Código de Procedimiento Penal sino más bien el que está estipulado en el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, con mucha observancia a lo que también refiere la Constitución del Estado. Por todo lo antes expuesto consideraremos hacer necesario una reforma urgente a la normativa legal que permita a los sujetos involucrados tener acceso a la información de lo cual son ellos partes en la investigación y así puedan ejercer un efectivo derecho a la defensa.

RECOMENDACIONES

Los sujetos investigados no deben permitir que en la indagación previa no se cumplan las normas del debido proceso, la cual los deja en indefensión en todo la investigación, independientemente que si tuvieran el acceso al expediente ellos podrían aportar con elementos de cargo o de descargo para el buen resultado de la investigación, por lo que hay que buscar el medio de una mejor tipificación la cual tenga armonía con una correcta investigación la misma que llegue a esclarecer sus responsables y no en la impunidad.

Es necesario concientizar la actitud de ciertos Agentes Fiscales y Policía Judicial dentro de la Investigación que se realiza en la Indagación Previa y su reserva, en lo que respecta al último inciso del Art. 215 del Código de Procedimiento Penal, cuyo fin sería de una mayor utilidad en la indagación previa observando las garantías del debido proceso, constituyéndose en procedimientos adecuados y necesarios que cubren el éxito de una investigación conforme a las directrices del proceso penal ecuatoriano.

Reformar el último inciso del Art. 215 del Código de Procedimiento Penal, con el fin de que dicha norma ordinaria se encuentre en armonía con el Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para que las partes en el proceso no queden en indefensión.

Crear campañas de capacitación a través de los Colegios de Abogados, a fin de que se den charlas sobre la correcta sustanciación de la Indagación Previa frente a las normas del debido proceso.

PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

PROYECTO DE TIPIFICACIÓN DE LA INDAGACIÓN PREVIA FRENTE A LAS NORMAS DEL DEBIDO PROCESO

La República del Ecuador, La Asamblea Nacional Constituyente; y, para Delitos Penales.

CONSIDERANDO:

Que el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución Política de la República del Ecuador, establece como uno de los deberes y atribuciones de La Asamblea Nacional el expedir, reformar y derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio ;Que es obligación fundamental del Estado, garantizar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de las personas y la seguridad jurídica; Que en la actualidad es necesario legislar con la finalidad de incorporar al Código de Procedimiento Penal en armonía a con lo que dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público, reformas destinadas a garantizar una adecuada tipificación a la correcta sustanciación de la Indagación Previa frente a las normas del Debido Proceso; Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 132 de la Constitución de la República del Ecuador, se requiere de la expedición de una ley para tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes; y, en ejercicio de las facultades Constitucionales y Legales expide la:

**PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL.**

Art. 1 en el Inciso quinto del Artículo 215 del Código de Procedimiento Penal, cámbiese, desde sin perjuicio hasta investigaciones, por lo siguiente; el ofendido y sospechoso o investigado tienen el derecho de intervenir en todos los actos investigativos del Ministerio Público, dentro del ejercicio de sus derechos y garantías establecidas en la Constitución y demás leyes del país, sin que en caso alguno quede en indefensión, además conservaran el derecho de acceder en forma inmediata y efectiva dentro de la investigaciones que se realizaren por el Ministerio Público.

BIBLIOGRAFÍA

Abarca Galeas, L. H. (s.f.). *Fundamentos Constitucionales del Sistema Procesal ecuatoriano*. Quito-Ecuador.

Albán Escobar, F. (2001). *Estudio Sintético sobre el Código de Procedimiento Penal*. Quito: Editorial Torres.

Cabanellas De Torres, G. (1998). *Diccionario Jurídico Elemental*. Buenos Aires: Editorial Heliasta.

Chiriboga Zambrano, G. (1995). *Derechos Fundamentales en la Constitución Ecuatoriana*. Quito: ILDIS.

Clarea Olmedo, J. (s.f.). *Derecho Procesal*. Buenos Aires- Argentina: Ediciones Desalma.

Código de Procedimiento Penal. (s.f.). Quito- Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.

Constitución de la República del Ecuador. (2009). Colección PRAXIS.

Cueva Carrión, L. (s.f.). *El Debido Proceso*.

García Valencia, J. I. (2005). *Conferencias Proceso Penal Acusatorio*. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda.

Gozáini, O. A. (2004). *Derecho procesal constitucional. El debido proceso*. Buenos Aires: Editores Rubinzai-Culzoni.

Guerrero Vivanco, W. (s.f.). *Los sistemas Procesales Penales Tomo I*. Guayaquil- Ecuador.

Ley Orgánica del Ministerio Público, R.O No. 26. (1997). Quito-Ecuador.

Moreno Nicolalde, F. (s.f.). *Garantías Constitucionales Y Derechos Humanos* . Tulcán-Ecuador.

Torres Chávez, E. (s.f.). *Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal*. Quito - Ecuador.

Vaca Andrade, R. (s.f.). *Fundamentos Constitucionales del Sistema Procesal ecuatoriano*. Quito-Ecuador.

Vélez Mariconde, A. (1986.). *Derecho Procesal Penal*. Argentina : Editorial Córdoba.

www.google.com.derechoecuador.com. (s.f.).

www.google.com.ec.eldebidoproceso.com. (s.f.).

www.google.com.eldercho.com. (s.f.).

www.google.com.sistemaacusatorio. (s.f.).

Yazan Montenegro, R. (s.f.). *Garantías Constitucionales y Derechos Humanos*. Tulcán.

Zavala Baquerizo, J. (2006). *Tratado de Derecho Procesal Penal*. Guayaquil- Ecuador.